

INFORME COMPLEMENTARIO INDH

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

2013

ESPAÑOL/ENGLISH

Consideraciones Generales

1. Desde el restablecimiento de la democracia en 1990, Chile ha vivido un proceso de profundización democrática, lo que se ha manifestado en un conjunto de reformas normativas sustantivas y procedimentales. En los últimos años merece destacarse la Ley de Participación (20.500 del año 2011), la Ley que establece medidas contra la discriminación (20.609 de 2012), la Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (20.405 de 2009), La Ley que Regula la Inscripción Automática, Modifica el Servicio Electoral y Moderniza el Sistema de Votaciones (20.568 de 2012) y así como también la apertura de espacios para el debate público y el establecimiento de mecanismos que permiten un mayor acceso a la justicia y a la información pública.

2. Con todo, en Chile la desigualdad social y la discriminación siguen afectando el ejercicio de derechos, entre ellos, los civiles y políticos. Diversos grupos vulnerados de la sociedad, tales como pueblos indígenas, personas adultas mayores y mujeres, entre otros, han experimentado la discriminación en el ejercicio de derechos civiles y políticos que les son reconocidos y que es obligación del Estado garantizar. La ausencia de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los tratos crueles a las personas adultas mayores en centros de larga estadía, la verificación de situaciones de tortura en cárceles y la violencia contra las mujeres por razones de género son algunas de las situaciones que el INDH ha constatado.

3. A partir del año 2009, se han hecho evidentes las dificultades del ordenamiento institucional respecto de las demandas expresadas por la ciudadanía en lo político, económico, social y cultural. Lo anterior tiene expresión en las manifestaciones públicas masivas que reclaman cambios para una efectiva participación de la ciudadanía y la necesidad de nuevos acuerdos institucionales que permitan un ejercicio más pleno de los derechos.

4. En este contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo autónomo del Estado, creado por ley (20.405 del año 2009), cuya misión principal es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, presenta el siguiente Informe sobre los avances y materias pendientes en el establecimiento y ejercicio de derechos civiles y políticos en Chile.

Observaciones al Informe inicial nacional de cumplimiento del PIDCP

5. Artículo 1. Derecho a la libre determinación de los pueblos

En el ámbito del derecho internacional referido a los pueblos indígenas se reconoce el principio de la libre determinación en el marco de la integralidad de las soberanías de los Estados nacionales. La relación del Estado con los pueblos indígenas en Chile requiere abordarse desde una

perspectiva que respete los derechos de los pueblos indígenas y las personas que lo integran. Esto implica, incorporar en las políticas públicas la diversidad de la sociedad chilena para instaurar relaciones interculturales asentadas en el respeto y garantía de los derechos.

Artículo 2. Garantías de Protección de los derechos del Pacto

6. Ley que establece medidas contra la discriminación. Tal como señala el Estado, uno de los avances más relevantes del período es la aprobación de la ley en julio de 2012 (Ley 20.609). El INDH ha planteado que pese al avance que significa esta ley aun hay aspectos que reformar, principalmente relacionados con integrar en la ley la obligación del Estado de adoptar medidas de distinta índole, entre ellas medidas de acción afirmativa, asegurando que la brecha existente entre igualdad formal y sustantiva pueda solucionarse, permitiendo que toda persona o grupo discriminado pueda ejercer sus derechos en pie de igualdad. Asimismo, la Ley no plantea medidas preventivas contra la discriminación, considerando que este ámbito requiere la eliminación de etiquetas, estereotipos y prácticas culturales que tienen un efecto discriminatorio.

7. Instituto Nacional de Derechos Humanos. La aprobación de la Ley 20.405 del 11 de noviembre de 2009 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido uno de los pasos más relevantes en la construcción de una institucionalidad permanente en materia de derechos humanos. Con todo, el INDH ha planteado que para estar acorde plenamente con los Principios de París, es necesario fortalecer la institución en aspectos relevantes que tienen directa relación con reforzamiento en aspectos presupuestarios y ampliar las facultades para tener un campo mayor de competencias y, así, cumplir de mejor manera su mandato. De hecho, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al Estado de Chile en su última visita “reforzar la independencia, recursos y capacidad del INDH, de acuerdo a los Principios de París”¹.

8. Subsecretaría de Derechos Humanos. El Estado está discutiendo actualmente un proyecto de ley para crear una Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia que diseñe, coordine e implemente políticas públicas que permitan guiar el contenido y organicidad de la acción del Estado en cuanto a derechos humanos. El INDH, junto con celebrar el proyecto presentado, ha planteado que la creación de una instancia de estas características no debe representar una disminución de las competencias y capacidades del INDH², lo cual requiere un adecuado diseño legislativo con miras a evitar duplicación de funciones y a una mejor coordinación entre ambos. Asimismo, en base al derecho a la verdad sobre violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas, el INDH ha planteado que la Subsecretaría debiese contar con facultades para conocer y calificar casos de violaciones a los derechos humanos en cuanto a casos de víctimas detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura³.

Artículo 3. Igualdad de género

9. Mercado laboral e igualdad. La participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado, pero sigue siendo baja respecto de los índices regionales, y aún mantiene mayor

¹ Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a Chile, 2013, A/HRC/22/45/Add.1, pág. 20.

² INDH, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 93. INDH, Minuta Proyecto de Ley de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Junio 2012.

³ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 94.

proporción que los hombres en trabajos precarios de solo media jornada o sin contrato⁴. Acorde al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del total de población en edad de trabajar, el 72.4% de los hombres constituye fuerza de trabajo, mientras que en las mujeres este porcentaje es del 46.7%⁵. Según el Informe Mundial de Género 2012 del Foro Económico Mundial, Chile ocupa el puesto 127 –entre 135 países– respecto a la diferencia salarial entre hombres y mujeres por un trabajo de las mismas características⁶. Para el INE “las brechas salariales que presentan las mujeres respecto a los hombres, son altas y se ubican en todos los grupos ocupacionales, sectores y categorías laborales”⁷.

10. Pre y post natal. La Ley 20.545 sobre extensión y flexibilización de los permisos de pre y post natal constituye un avance en la medida que reconoce la flexibilidad como un aspecto que ayuda a las mujeres a reingresar al mercado laboral y, a la vez, potencia la importancia de rol paterno en la crianza y el cuidado de los/as hijos/as, promoviendo mayor igualdad en torno a estos roles tradicionalmente asignados a las mujeres. No obstante la nueva normativa permite que la pareja decida quién de los dos ejerce el post natal en su etapa posterior a los primeros tres meses, en la práctica, según la Superintendencia de Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2012 de los 111.584 subsidios parentales que se han pagado, 290 han sido cancelados a hombres⁸.

11. La actual legislación debiera considerar a mujeres que no cuentan con vinculación formal al mercado laboral, dado que estudios muestran un alto porcentaje de mujeres con trabajos precarios. SERNAM da cuenta de 47.8% al cierre de 2011 –aún 26 puntos bajo la participación masculina– e informa que el 63% de los 211.000 empleos creados ese año fueron ocupados por mujeres. Sin embargo, preocupa que se trate principalmente de trabajo precario e inestable como ha sido la tendencia durante la década. Entidades especializadas advierten que 47% de estos empleos femeninos son por cuenta propia y 34% corresponden a empleo asalariado: “El trabajo por cuenta propia que se observa en este período es principalmente precario, con alta presencia de jornada parcial y trabajadores de baja calificación”. Por su parte, en la modalidad de ocupación salarial, el 100% responde a “subcontratación, servicios transitorios y suministro de personal y enganchadores, lo cual es una señal de mayor precarización e inestabilidad en el mundo del trabajo”⁹.

12. Derecho a la salud sexual y reproductiva. En el período que cubre este informe se promulgó la Ley que Fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad y se adoptó el respectivo reglamento¹⁰. Con este último se espera resolver el problema de acceso a la anticoncepción de emergencia que había y que se reflejaba en que sólo el

⁴ Comunidad Mujer, Mujer y Trabajo: el desafío del trabajo decente, 2011, página 6. “83% de los hombres declara tener contrato de trabajo, al tiempo que sólo 72% de las mujeres manifiesta tenerlo. Asimismo, en los hombres el contrato indefinido (67%) supera en diez puntos porcentuales a las mujeres (57%). Apreciamos que jornadas diferentes a la completa, como la jornada parcial, son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres: 6% de los hombres y 20% de las mujeres”. Ver también Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo Humano en Chile. Género: Los desafíos de la igualdad, 2010, pág. 111.

⁵ Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Situación laboral de las mujeres ocupadas y las brechas salariales que inciden en la estructura ocupacional chilena, 2011, pág. 56.

⁶ Foro Económico Mundial, The Global Gender Gap Report, 2012, pág. 144.

⁷ Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Situación laboral de las mujeres ocupadas y las brechas salariales que inciden en la estructura ocupacional chilena, 2011, pág. 96.

⁸ Información disponible en www.suseso.cl

⁹ Fundación Sol Minuta de empleo nº 4, julio – septiembre 2011. Unidad Estadísticas del Trabajo.

¹⁰ Ministerio de Salud, Decreto Nº 49 publicado en el Diario Oficial de 28.03.13. Aprueba reglamento para el ejercicio del derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad.

77,8% de los municipios chilenos la entregaba, mientras que un 10,9% incumplía la obligación legal destinada a enfrentar una realidad como es el embarazo adolescente¹¹.

13. Participación política.¹² Las mujeres tienen una representación en los cargos de elección popular del 13,7%, muy por debajo del 26% que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno de los puntos más preocupantes es el sistema binominal existente en Chile para las elecciones legislativas, el cual constituye un obstáculo objetivo a la participación y elección de las mujeres.¹³ El INDH ha señalado que ante las pocas opciones de presentar candidaturas que otorga el sistema, los partidos seleccionan candidatos ya testeados (“seguros”), los que mayoritariamente son hombres; de hecho, 90,3% de las candidaturas presentadas por los partidos al electorado entre 1989 y 2005 han sido de hombres. Esto provoca, además, altas tasas de reelección lo cual dificulta el ingreso de nuevas candidaturas, entre ellas, de las mujeres¹⁴. El Comité de la CEDAW reiteradamente ha instado al Estado a intensificar “sus esfuerzos encaminados a reformar el sistema electoral binominal, que es desfavorable para la representación política de la mujer, y a que adopte medidas, en particular medidas especiales de carácter temporal, destinadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre a fin de incrementar la participación de la mujer en la vida política, particularmente en el Parlamento y los municipios”¹⁵.

14. Sociedad Conyugal. La sociedad conyugal, en la medida que está consagrado como el régimen patrimonial supletorio del matrimonio, sitúa a la mujer en una situación de desigualdad al ser un régimen explícitamente discriminatorio para las mujeres.¹⁶ El Estado de Chile acordó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante una solución amistosa en el caso *Sonia Arce vs. Chile*, modificar legalmente este régimen patrimonial¹⁷. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos a propósito del Quinto Informe Periódico recomendó al Estado de Chile “acelerar la adopción por el senado de la ley que abroga la sociedad conyugal como régimen supletorio y su sustitución por uno de comunidad en los gananciales”¹⁸. Sobre lo mismo, en 2012, el Comité CEDAW recomendó al Estado de Chile “acelerar, dentro de un marco de tiempo claro, la promulgación [del proyecto de] Ley No. 7567-07 que modifica el Código Civil y otras leyes que regulan el régimen económico matrimonial [,] asegurar de que el nuevo régimen matrimonial garantice la igualdad de derechos para las mujeres y los hombres [...] y asegurar que las mujeres reciban información que les permita tomar una decisión informada”¹⁹. Dicho proyecto se encuentra actualmente en el Senado, en segundo trámite constitucional y tiene urgencia simple.

¹¹ La principal razón aducida para no entregar este medicamento es la falta de existencia (31,4%) y de recursos humanos (17,1%). Dides, Claudia, Benavente, Cristina, Sáez, Isabel, Seguimiento a la Ley 20.418: Prevención del embarazo adolescente, educación sexual y anticoncepción de emergencia, publicado por el Programa de Investigación para el Desarrollo y la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Chile, pág. 35 y 36.

¹² Recientemente -julio de 2013- se han puesto en debate en el Senado tres proyectos de ley que proponen modificaciones al sistema electoral, dos de iniciativa parlamentaria y uno enviado por el Ejecutivo; en abril del mismo año fue aprobada la ley 20.640 que “Establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república, parlamentarios y alcaldes, parlamento”.

¹³ INDH, Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en Chile. 2012. Pág. 134.

¹⁴ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile. Pág. 134.

¹⁵ Así lo expresó en 2006 (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 14) y lo ha reiterado en 2012 (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 24).

¹⁶ INDH, Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en Chile. 2010. Pág. 82.

¹⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso *Sonia Arce vs. Chile*, N° 12.433.

¹⁸ Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales. Chile, 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 17.

¹⁹ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales. Chile, 2012, CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 47 (a).

Artículo 6. Derecho a la vida

15. **Femicidio.** Entre 2007 y 2012, según el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), en Chile han ocurrido 299 femicidios²⁰. Si bien la cifra en los últimos años ha ido decreciendo (49 el 2010; 40 el 2011 y 34 el 2012), esta continua siendo una realidad que atenta contra el derecho a la vida de mujeres año a año por el solo hecho de ser mujeres y que requiere todos los esfuerzos del Estado para investigar y sancionar a los responsables con penas que impliquen una garantía de no repetición.

16. Es un avance en la materia la entrada en vigencia el año 2010 la Ley 20.480 que establece el delito de *femicidio* en el contexto del parricidio. Esta ley busca la protección del derecho a la vida reconociendo la gravedad de tal forma de violencia y permitiendo un trato diferenciado que es fundamental para su prevención. La Ley podría ser profundizada si considerara los asesinatos por razones de género que se dan en relaciones distintas a las formalmente reconocidas, como son otras relaciones afectivas sin convivencia o que no tengan hijos en común o los ataques sexuales con resultado de muerte cometidos tanto por conocidos como por desconocidos²¹. Cabe destacar que la Ley que establece medidas contra la discriminación modifica el Código Penal y establece como agravante la comisión o participación en un delito motivado, entre otros factores, por la orientación sexual, identidad de género o sexo de la víctima.²²

Respuesta al Párrafo Nº 8 de las Observaciones finales:

17. **Aborto.** En relación al aborto, el Código Penal sanciona al que “maliciosamente causare un aborto... 1° Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada²³; 2° Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer; 3° Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere” (art 342). La mujer que cause su aborto o consienta en ello es castigada con castigada con presidio menor en su grado máximo, salvo que lo haga para ocultar su deshonor, con lo cual la pena se reduce a presidio menor en su grado medio (art. 344). Respecto del facultativo que “abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado”. Por su parte, el Código Sanitario en el Libro Quinto que regula “el ejercicio de la medicina y profesiones afines” establece que “[n]o podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto” (art. 119). Esta penalización del aborto se ha mantenido desde 1989, existen recomendaciones²⁴ realizadas por diferentes órganos encargados de la supervisión de tratados sin que conste la adhesión del Estado a ellas. Se han presentado proyectos de ley que proponen reformas a la actual legislación para considerar la regulación del aborto en casos de riesgo para la vida y salud de la

²⁰ Información disponible en www.sernam.cl

²¹ INDH, Informe Anual 2011. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 127.

²² Art. 17 Ley 26.609 del año 2012.

²³ La pena aumenta a grado medio si el estado de embarazo es notorio o le constare al hecho (art. 343).

²⁴ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales. Chile, 2012, CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 35 (d). “revisar la legislación vigente sobre el aborto con miras a la despenalización en casos de violación, incesto o amenaza a la salud o la vida de la madre”. En sentido similar, el Comité DESC recomendó a Chile “52. ...que revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.” E/C.12/1/Add.105, 26 de noviembre de 2004, párr. 52.

mujer, por razones de malformación grave incompatible con la vida y por violación. En el marco del debate parlamentario no ha existido acuerdo para legislar sobre la materia²⁵.

Respuesta al Párrafo N° 9 de las Observaciones finales:

18. Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas (1973 – 1990). El INDH en sus informes anuales ha planteado un conjunto de observaciones al deber del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones masivas, graves e institucionalizadas a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. La primera de ellas es dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile en el caso Almonacid Arellano en virtud de la cual la Corte establece la obligación de privar de todo efecto jurídico al Decreto Ley 2.191, conocido como “Ley de Amnistía”²⁶. Se debe destacar la acción del Poder Judicial²⁷ en cuanto a enmendar y acatar la sentencia de la Corte IDH en orden a “investigar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables por la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano (...)”²⁸.

19. El Estado menciona dos proyectos legislativos que a su juicio excluirán la aplicación de la ley de Amnistía. Uno es la “Ley interpretativa que adecúa la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos” (Boletín N° 6422-07), la que desde junio del 2011 se encuentra en el segundo trámite constitucional y sin urgencia para su debate. El segundo proyecto es la “Ley que modifica el artículo 675 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo una nueva causal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos” (Boletín N° 6491-07). Esta actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional y sin urgencia para su debate. En resumen, las dos iniciativas relevadas por el Estado no han tenido la prioridad para su debate y aprobación en el Congreso.

20. Si bien el INDH ha constatado que desde 1998 la Corte Suprema ha establecido en sus sentencias el criterio de no dar aplicación al DL 2.191 y declarar imprescriptibles estos crímenes, es relevante puntualizar que las sentencias en Chile tienen efecto solo entre las partes, por lo que mientras exista esta legislación, está sin embargo abierta, la posibilidad de su utilización por parte de los tribunales de justicia.

21. El INDH valora los avances graduales logrados en materia de responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante la dictadura. A septiembre de 2012 se ha procesado y condenado a 814 ex agentes, pertenecientes mayoritariamente al Ejército de Chile (358 ex agentes) y Carabineros (266 ex agentes). No obstante, cabe señalar que en materia de sanción penal, la aplicación de figuras jurídico-penales como la media prescripción, han atenuado las sanciones

²⁵ Los proyectos rechazados son: 1) Sobre interrupción terapéutica del embarazo (Boletín 6522-11) presentado en mayo de 2009; 2) Modifica el Código Sanitario señalando los casos en los cuales se podrá interrumpir un embarazo (Boletín 6591-11) presentado en julio de 2009; 3) Despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas (Boletín 7373-07) presentado en diciembre de 2010.

²⁶ Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Párr. 124 y siguientes.

²⁷ En relación a dicha obligación, la Corte Suprema en julio de 2013 dicta sentencia condenatoria en contra del responsable del homicidio que dio origen a este caso, cumpliendo en esta parte lo resuelto en sede internacional. Corte Suprema. Sentencia recaída en los autos Rol N° 1260-13 de 29 de julio de 2013. Con ello se confirma lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Rancagua Rol 2242-2011 de 18 de agosto de 2011.

²⁸ Resolución de la Corte IDH de 18 de noviembre de 2010 Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.

penales y quebrantado el principio de proporcionalidad en relación al daño cometido. Ello significa que un total de 173 agentes condenados con sentencia definitiva por estos crímenes, nunca fueron encarcelados²⁹ y que sólo 67 personas se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad. De estos, 15 han sido objeto de algún tipo de beneficio³⁰ cuestión que si bien no es objetada como medida general para las personas privadas de libertad, en este contexto, contribuyen a dar una señal de impunidad.

22. Si bien los tribunales superiores de justicia en los últimos años han dado pasos importantes para establecer las responsabilidades penales frente a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y encuadrar normativamente esas conductas criminales como hechos repudiables a la luz del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, el Estado de Chile continúa sin reconocer el derecho a la reparación judicial. La jurisprudencia en esta materia ha sido contradictoria. Por existir diferencias en los fallos respecto de la prescriptibilidad de la acción civil, en junio de 2012, por primera vez se remitieron los antecedentes relativos a la prescripción de la acción civil indemnizatoria al Pleno de la Corte Suprema, a efectos de unificar la jurisprudencia³¹. Realizada la vista de la causa, se resuelve desestimar la acción indemnizatoria de los familiares y declara prescrita la acción respectiva³².

23. En su informe el Estado destaca dos iniciativas sobre violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas: el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (también conocida como Comisión Valech). En específico sobre el Programa de Derechos Humanos, el INDH valora positivamente las nuevas facultades otorgadas por la Ley 20.405 que le permiten ejercer todas las acciones legales que sean necesarias, incluidas las de presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada, en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria. A septiembre de 2011 dicho Programa había presentado en virtud de sus nuevas facultades un total de 258 nuevas querellas representativas de 383 víctimas. Es necesario fortalecer el trabajo del Programa y que se garantice la institucionalidad, recursos y personal necesarios para cumplir cabalmente su mandato y brindar un debido acompañamiento judicial y social a los familiares de las víctimas. Del mismo modo, el INDH advierte que el Programa no ha podido avanzar con la celeridad esperada en dar una cobertura de asistencia judicial completa a las víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria o extrajudicial, por requerirse de la firma del Subsecretario del Interior para la presentación de las querellas. En cuanto a la Comisión Valech, esta tuvo como objetivo calificar casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura entre 1973 y 1990. Luego de 18 meses la Comisión finalizó su trabajo en agosto del 2011 y en su informe incluyó un total de 9.800 víctimas de prisión política y tortura y 30 víctimas de desaparición forzada y ejecución política. La Comisión es valorada por representar un paso más en el proceso de reparación integral a que el Estado de Chile se ha comprometido.

²⁹ Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias A/HRC/22/45/Add.1, 29 de enero de 2013, pár. 27

³⁰ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 283 y 284.

³¹ Causa por el secuestro calificado del Dr. Eduardo Alberto González Galeno. Corte Suprema Rol N° 10.665-11. 25 de junio de 2012. Esta misma decisión adoptó la Sala Penal tras la vista de la causa por el homicidio calificado de Luis Pantaleón Pincheira Llanos y otros Corte Suprema Rol N° 3841-12.

³² Corte Suprema Rol N° 10.665-2011. 21 de enero de 2013.

24. Desde el año 2010 se han detectado inconsistencias en el proceso de calificación de exonerados por razones políticas, que ha motivado el inicio de investigaciones judiciales y fiscalizaciones de parte del Poder Legislativo.³³ El 8 de septiembre de 2011, el Subsecretario del Interior entregó información sobre 126 casos para anular resoluciones de exoneración. Adicionalmente, se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que inició un examen de los antecedentes a los efectos de determinar las responsabilidades políticas que eventualmente estén involucradas en este caso. Aun están pendientes los resultados de la investigación.³⁴

25. En relación a la publicidad de toda la documentación colectada por la Comisión Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT), no existe a la fecha información sobre un cambio en el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante Comisión Valech; documentos que como es señalado en el Informe del Estado, deben mantenerse durante 50 años en secreto.

26. Con motivo de la implementación de las modificaciones introducidas por la Ley 28.556 sobre inscripción automática y voto voluntario, se incorporó al registro electoral el nombre de personas detenidas desaparecidas, sin advertir ésta calidad. Ello dio cuenta de un vacío institucional en el reconocimiento pleno de la condición jurídica de las personas víctimas de desaparición forzada. El Poder Ejecutivo, en el contexto de la depuración del padrón electoral, ha promovido una iniciativa de ley que busca excluir a dichas víctimas de estos registros, a pesar de existir un amplio consenso a nivel parlamentario en sentido contrario. Dicho consenso motivó al Ejecutivo a presentar un nuevo proyecto que no hace referencia a las víctimas de desaparición forzada. En la medida que ello implica que el Ejecutivo ha desoído las propuestas, avaladas unánimemente por el Senado, en términos de presentar un proyecto de ley que establezca un Registro y Estatuto especial para las víctimas de desaparición forzada, el INDH reitera que es consistente con la obligación del Estado de esclarecer la suerte de dichas personas debiendo, mientras se mantenga la situación de antijuridicidad, adoptar las normas de derecho interno que permitan tutelar la personalidad jurídica del ausente y garantizar de esta forma sus derechos y los de sus allegados.

Artículo 7. Prohibición de la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

27. Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Sigue pendiente la obligación del Estado de implementar el MNPT acorde al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (“el Protocolo”). En su Informe el Estado de Chile plantea que el MNPT estará radicado en el INDH. Para el INDH se hace indispensable un reconocimiento explícito de las atribuciones contempladas de acuerdo a los estándares estipulados en el Protocolo. Adicionalmente, se requiere de recursos e infraestructura

³³ En los meses de agosto y septiembre de 2011, el INDH ofició a la Oficina de Exonerados Políticos a fin de recabar información sobre el proceso de calificación y, específicamente, sobre la existencia de estudios o informes de evaluación de los procesos y/o denuncias de fraudes. La Oficina informó que ellos no “disponen de estudios o informes oficiales sobre el particular”, e indicó que las acciones emprendidas en este sentido fueron la presentación de una querrela el 13 de agosto de 2010 por parte del Ministerio del Interior por los delitos de falsificación de instrumento público y usurpación de funciones, entre otros, y el envío de un oficio al Consejo de Defensa del Estado a fin de requerir el inicio de juicio de nulidad de derecho público con el objeto de dejar sin efecto resoluciones de exonerados que hayan sido otorgados ilegalmente.

³⁴ INDH, Informe Anual 2011. Situación de los derechos humanos en Chile. Pág. 262.

suficientes y adecuados para cumplir eficientemente las funciones que el mecanismo nacional de prevención demanda³⁵.

28. **Acceso a la justicia de personas privadas de libertad.** Si bien el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece mecanismos administrativos para que las personas privadas de libertad puedan denunciar malos tratos, estos presentan serios problemas para cumplir su fin. Los principales inconvenientes en la vía administrativa dicen relación con insuficientes garantías del debido proceso como es la asistencia de una defensa profesional, la imparcialidad de quien conoce y juzga o la falta de información para el/la interno/a sobre por qué está siendo juzgado y qué actos contrarios al reglamento se imputan. Otra preocupación son las denuncias sobre malos tratos o torturas, no obstante existir procedimientos tanto en la vía administrativa como judicial, estos presentan obstáculos en su interposición y resultado. Respecto a la vía judicial, se requiere del patrocinio de un abogado/a para presentar y tramitar la denuncia, o acudir ante el Ministerio Público, lo cual en la práctica es complejo de realizar a una persona privada de libertad a menos que cuente con una red de apoyo en el exterior o el Ministerio Público actúe de oficio.

29. Una de las consecuencias más severas en este punto es en la aplicación arbitraria de las celdas de aislamiento a personas privadas de libertad, el cual constituye un trato cruel e inhumano. Las cifras oficiales entregadas por Gendarmería al INDH muestran una utilización excesiva de este castigo.

Número de sanciones penitenciarias entre enero y agosto de 2012

Tipo de Sanción	Número de sanciones	Porcentaje
Amonestación verbal	27	0.11
Amonestación negativa	277	1.16
Limitación de visitas	68	0.28
Privación de actos recreativos	73	0.3
Privación de permisos para salida	13	0.05
Privación de visitas	4.550	19.2
Celda de aislamiento	18.672	78.9

Fuente: Gendarmería de Chile. Oficio N° 0569 de fecha 24 de septiembre de 2012, en respuesta al INDH.

30. El INDH ha planteado en su Informe Anual que esta sanción “constituye una utilización excesiva de una medida que es extremadamente severa tanto de la restringida libertad individual del interno, como también de los efectos que tiene en la integridad física y psíquica”³⁶. El INDH también ha planteado, en un estudio específico reciente sobre la materia, que “en la mayoría de los recintos públicos, los reclusos(as) no contaban con servicios higiénicos y tampoco les era permitido ser desencerrados para estos efectos, debiendo hacer sus necesidades en botellas y bolsas, con las que permanecían hasta el desencierro. Tampoco contaban con agua potable: el

³⁵ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile, pág.89.

³⁶ INDH, Informe Anual 2011. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 24.

agua era entregada en botellas y, en varios casos, transcurrida la tarde y durante todo el período nocturno de encierro, no contaban con más agua que aquella que había sido ingresada en el día para saciar su sed y drenar las tazas turcas. En no pocos recintos, no se les autorizaba el ingreso de artículos de higiene ni toalla, por lo que los reclusos(as) permanecían desaseados durante toda su reclusión”³⁷. Así, el actual reglamento de establecimientos penitenciarios, en su artículo 86 señala que “Todo interno afectado por esta medida disciplinaria no podrá recibir paquetes, salvo artículos de higiene y limpieza, que no importen riesgo para su seguridad o integridad, y los medicamentos autorizados por el médico del establecimiento”, lo que en la práctica sin embargo, no es respetado. Según un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile “la imposición de la sanción de celda de aislamiento es una práctica vigente, frecuentemente utilizada y que afecta a una parte importante de la población penitenciaria (cerca del 32% en 2011)”³⁸.

31. El INDH destaca la creación de la Unidad de Derechos Humanos dentro de Gendarmería, el convenio firmado entre esta institución –dependiente del Ministerio de Justicia- y el INDH, y la resolución 4248 adoptada por Gendarmería para la eliminación gradual de las celdas de aislamiento de los establecimientos penitenciarios en Chile.

Respuesta al Párrafo Nº 10 de las Observaciones finales

32. **Violencia Policial.** En materia de tratos crueles, inhumanos o degradantes, las denuncias existentes por violencia policial han estado enmarcadas dentro de contextos de movilizaciones sociales en torno a demandas sociales específicas planteadas por diversos grupos de la sociedad como mapuche o estudiantes, y en diversas regiones del país.

33. En tales movilizaciones se ha constatado actuaciones de Carabineros que han afectado la integridad física y psíquica de quienes se manifiestan. Durante el 2011, tras hacer un seguimiento a 4 manifestaciones en Santiago, el INDH concluyó que en el actuar de Carabineros hubo prácticas inapropiadas y de violencia injustificada contrarios a la normativa vigente y sin distinguir entre personas que ejercen pacíficamente su derecho a reunirse y expresar sus opiniones de aquellos grupos que utilizan acciones violentas³⁹. Así también, el INDH ha dado cuenta de casos de denuncias de violencia hacia mujeres y adolescentes por parte de funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile, donde en diversas comisarías ellas habrían sido obligadas a desnudarse⁴⁰.

34. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurren, asimismo, al interior de los buses de Carabineros, los que son de difícil investigación y donde no hay registro alguno de quienes son las personas detenidas, ya que eso ocurre recién al momento de arribar a la Comisaría. En este sentido, y frente a la negativa inicial de Carabineros de Chile, ha sido un avance el reconocimiento por parte de la Contraloría General de la República (CGR), de la facultad del INDH para ingresar a los buses de Carabineros para constatar el estado de salud de los detenidos/as⁴¹. Junto a lo

³⁷ INDH, Estudio sobre condiciones carcelarias sobre la base de plan de visitas a cárceles, abril de 2013, pág. 44.

³⁸ Nash, Claudio, Personas privadas de libertad y medidas disciplinarias en Chile: Análisis y propuestas desde una perspectiva de derechos humanos, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile, 2013, pág. 92.

³⁹ INDH, Informe sobre Programa de Seguimiento y Registro de abusos policiales, 2011.

⁴⁰ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 27.

⁴¹ Específicamente, la CGR determinó que “corresponde entender que es procedente en derecho que el INDH comisione a los personeros que indica el precitado artículo 4º, inciso segundo, para que ingresen a cualquier lugar espacialmente limitado, que se encuentre a cargo de funcionarios públicos, en que pueda configurarse una privación de libertad, con la finalidad de obtener antecedentes necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de dicha corporación, hipótesis normativa que concurre tratándose de vehículos policiales”. Contraloría General de la República. Dictamen Nº 058070

anterior, Carabineros comenzó la instalación de cámaras de video en los buses de detención, lo que constituye una medida de garantía y transparencia por parte de la Institución.⁴² Sin embargo, el funcionamiento de las cámaras ha sido limitado y aun está pendiente su utilización en regiones y en forma coordinada.

35. Asimismo, el INDH ha planteado que en ciertos casos las detenciones se utilizan con el objetivo de limitar ilegítimamente el derecho a manifestación. Entre el año 2009 hasta julio de 2011 el Ministerio Público ha recibido 35.203 causas por desórdenes públicos, donde un 49,1% (17.293 causas) concluyen por ejercicio de facultades de la Fiscalía, un 14,1% (4.966 causas) se aplica la facultad de no investigar, un 2,4% (846 causas) por sobreseimiento definitivo y un 23,2% (8.191 causas) terminan con sentencia condenatoria. La mayoría de las causas ni siquiera llegan a juicio ya sea porque no hay antecedentes suficientes, porque no existe delito o porque los hechos no constituyen una afectación grave al interés público. Así, la persecución criminal opera deteniendo preventiva, aleatoria y arbitrariamente, como una forma de controlar ilegítimamente las manifestaciones. El INDH ha enfatizado que el derecho a manifestación se ejerce a través de métodos pacíficos y, en este contexto, ha condenado la acción violenta de grupos durante las marchas.

36. Un caso lamentable de violencia en el contexto de movilizaciones fue el homicidio del adolescente de 16 años Manuel Gutiérrez. Según la información disponible, Manuel se encontraba mirando las manifestaciones junto a su hermano, cuando funcionarios de Carabineros comenzaron a disparar desde su vehículo, alcanzando una de las balas al adolescente, quien tras ser conducido a un centro asistencial, falleció. En una primera instancia Carabineros negó su participación así como investigar el hecho, pero posteriormente se constató que la bala sí fue disparada por un funcionario de dicha entidad, quien fue dado de baja. El caso está actualmente en la justicia militar. Otro caso lamentable es el de Angelo Estrada, quién quedó parapléjico luego que recibiera un disparo percutado al aire por un funcionario de Gendarmería que intentaba dispersar un grupo de manifestantes que se enfrentó a un carro de traslado de reclusos.

37. Respecto del pueblo mapuche, el INDH ha recolectado una serie de testimonios sobre el actuar de la policía en las comunidades que dan cuenta de una práctica habitual del uso de la fuerza que no guarda proporciones con las obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos que les corresponde a Carabineros⁴³. El actuar policial⁴⁴ también ha sido criticado por el Poder Judicial, el cual ha señalado que “las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temuicui constituyen hechos públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente mediante el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este Tribunal respecto de la necesidad de

sobre acceso de personeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos a vehículos policiales. 21 de septiembre de 2012, pág. 4. La CGR confirmó su pronunciamiento ante la solicitud de revisión por parte de un grupo de parlamentarios, afirmando que “En mérito de todo lo expuesto esta Contraloría General ha llegado a la conclusión de que no corresponde modificar lo informado en el dictamen N° 58.070, de 2012, por lo cual desestima la petición formulada en tal sentido por los parlamentarios ocurrentes y ratifica en todas sus partes ese pronunciamiento.” Contraloría General de la República. Oficio N° 32675 sobre acceso de personeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos a vehículos policiales. 28 de mayo de 2013, pág. 4

⁴² INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 24.

⁴³ INDH, Informe Misión de Observación Región de la Araucanía: 17 al 20 enero de 2012, pág. 9.

⁴⁴ También el Poder Judicial ha conocido de situaciones de abuso, en muchas ocasiones afectando a niños y niñas indígenas, en las que se vieron involucrados funcionarios de Policía de Investigaciones. Corte de Apelaciones de Temuco. Rol 435 -2013. Sentencia de 6 de julio 2013.

tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar no sólo lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT”⁴⁵.

38. También hubo hechos de violencia durante la primera quincena de febrero de 2012 con el conflicto en la Región de Aysén, en el sur de Chile, el cual estuvo caracterizado por importantes movilizaciones sociales, donde el INDH denunció un uso irregular y desproporcionado de escopetas antidisturbios, causando lesiones de diversa consideración a las personas, evidenciando que estos fueron disparados directamente al cuerpo y a muy corta distancia⁴⁶. Desafortunadamente, en este caso el Poder Judicial se inhibió de controlar la proporcionalidad del uso de la fuerza policial⁴⁷. Por su parte, en el norte de Chile, en la comuna de Freirina, hubo denuncias de violencia policial contra sus habitantes quienes reclamaban por su derecho a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación. Una misión del INDH constató “un uso irregular y desproporcionado de escopetas antidisturbios, causando lesiones de extrema gravedad en al menos una persona que participaba de la protesta social”, como también “un uso indiscriminado de gases lacrimógenos y demás medios disuasivos por parte de la policía, alejándose con ello de los protocolos definidos por carabineros para el uso de estos instrumentos disuasivos”⁴⁸.

39. En este contexto, resulta valorable la creación de la Unidad de Derechos Humanos en Carabineros. Esta medida debe ir acompañada, sin embargo del reforzamiento de la cultura institucional de autocontención que inhiba la generalización de prácticas de violencia policial, particularmente por parte de Fuerzas Especiales. Asimismo, y respecto de los casos concretos que se conocen, se requiere mejorar los procesos de rendición cuenta como son los sumarios internos para determinar responsabilidades⁴⁹. Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado chileno establecen la obligación para el Estado de investigar y sancionar toda afectación a tales derechos. En este sentido, Carabineros de Chile, como organismo que es parte del Estado y en cuyo mandato recae el uso monopólico de la fuerza, debe investigar y sancionar a sus agentes responsables de cometer hechos de violencia hacia la ciudadanía, lo que además constituye una garantía de no repetición para el futuro.

Respuesta al Párrafo Nº 12 de las Observaciones Finales

40. **Justicia Militar.** El INDH valora la promulgación de la Ley 20.477 que limita la competencia de tribunales militares, sin embargo considera que esta modificación de la ley fue parcial e insuficiente y no representa un cumplimiento con las obligaciones del Estado de Chile. El INDH considera que el alcance de la reforma introducida es restrictivo puesto que el Código de Justicia Militar mantiene vigentes hipótesis de delitos en los cuales el victimario o imputado es un militar (incluidos miembros de carabineros) y la víctima o sujeto pasivo del mismo, puede eventualmente ser civil. Se hace indispensable introducir reformas en sintonía con la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Palamara Iribarne vs. Chile y las recomendaciones formuladas por los órganos de tratados y los propios compromisos gubernamentales asumidos a este respecto.

⁴⁵ Corte de Apelaciones de Temuco. Rol 1136-2011. Sentencia de 21 de diciembre de 2011. Considerando 5. La sentencia fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema, Rol 35-12, de cinco de enero de 2012.

⁴⁶ INDH, Informe Misión de Observación Región de Aysén: 22 al 25 de febrero de 2012, pág. 21.

⁴⁷ Corte Suprema, ROL 4143 2012, julio de 2012.

⁴⁸ INDH, Informe Misión de Observación a Freirina: 31 de mayo y 1 de junio de 2012, pág. 35.

⁴⁹ INDH, Informe Misión de Observación Región de la Araucanía: 17 al 20 enero de 2012, pág. 9.

Artículo 8. Prohibición de Esclavitud, Trata, Servidumbre y Trabajos Forzosos

41. Trata de personas. El INDH destaca la promulgación de la Ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Es una reforma necesaria que amplió el delito, no limitándolo solo a la explotación sexual, agregando trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud y extracción de órganos. No obstante, hay una serie de brechas normativas y prácticas que impiden la erradicación de la Trata en el país. Entre las más importantes, se requiere que la Ley comentada considere explícitamente la Trata interna de personas, principalmente si se considera que las investigaciones indican que para el caso de Chile la Trata es principalmente de esta naturaleza.

42. Asimismo, el INDH ha relevado que existe falta de información que permita contar con un registro del número de casos, personas afectadas por sexo, nacionalidad o edad, entre otras variables. Además, hay una falta de capacitación en el tema tanto en el Poder Judicial como en ciertas instituciones como Carabineros, que no cuentan con protocolos, instructivos o guías que sirvan para detectar situaciones de trata y tráfico de personas. El INDH recalca como un aspecto positivo la reactivación de la Mesa Intersectorial sobre trata de personas, integrada por un conjunto de Ministerios y servicios del Estado que tienen directa relación con la materia. El INDH se ha hecho parte de dicha instancia.

Artículo 9. Prohibición de detención o prisión arbitraria

43. Prisión preventiva. Para el INDH la situación de personas privadas de libertad en situación de prisión preventiva, es un aspecto de preocupación. La prisión preventiva es una figura jurídica en tensión en una sociedad democrática ya que afecta la presunción de inocencia y, por lo mismo, su utilización debe ser restringida. Sin embargo, tan sólo el 23% de las personas que se encontraban en prisión preventiva entre 2005 y 2010, terminaron siendo condenadas a una pena privativa de libertad⁵⁰. El uso desmedido de la prisión preventiva ha sido destacado por la Defensoría Penal Pública en los últimos años, especialmente en aquellos casos en lo que existe prisión preventiva no obstante el imputado del delito termina absuelto.⁵¹ A ello se agrega que no existe vía judicial ni administrativa para aquellas personas que fueron sujetas a una prisión preventiva improcedente.⁵²

Artículo 10. Trato humano y digno en privación de libertad

44. Chile presenta un grave problema de hacinamiento carcelario y cuya expresión más dramática tuvo su episodio en diciembre de 2010 cuando un incendio ocurrido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de San Miguel provocó la muerte de 81 internos. A la fecha de dicho accidente,

⁵⁰ A lo anterior, debe sumarse las cifras ya entregadas respecto al alto número de detenciones ilegales declaradas por tribunales en el contexto de manifestaciones sociales.

⁵¹ Véase Defensoría Penal Pública, Informe Estadístico 2007, pág. 31 y Memoria Anual 2008, pág. 47. En el mismo sentido ver Duce, Mauricio y Riego, Cristián, La prisión preventiva en Chile: Análisis de los cambios legales y su impacto, Ediciones Universidad Diego Portales, 2011, pág. 165. En este sentido, la Defensoría Penal Pública lanzó el “Proyecto Inocentes” que surge como respuesta a los problemas que les ocurren a los imputados, en tanto han sido sujetos de persecución penal y cuando se les imputa la comisión de un delito y luego se comprueba su inocencia.

⁵² El 1 de septiembre de 2013 el Estado anunció modificaciones al proyecto de ley de “Reforma a la Reforma Procesal Penal” Boletín N° 8810-07. Entre las medidas anunciadas destaca la ampliación de criterios y facultades para los jueces de garantía en la determinación de las prisiones preventivas de los imputados. Lo anterior, es contrario al objetivo inicial de la Reforma Procesal Penal que estaba orientada a la utilización de la prisión preventiva de manera excepcional.

CDP tenía una población de 1.875 internos, con una infraestructura para 632 personas, es decir, 197% de sobrepoblación.

45. A septiembre de 2012 la población penal en sistema cerrado era de 51.651 personas, pero el número de plazas de las cárceles chilenas solo permitía a esa fecha 41.034 plazas, lo que implica una sobrepoblación del 25%. Si bien el nivel de hacinamiento ha disminuido principalmente por la aprobación de la Ley 20.588 sobre indulto general, constatándose una disminución de 1.732 personas privadas de libertad respecto del 2011, aun persisten altos niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios que acompañada de una percepción de inseguridad en la población en Chile, alienta el uso de la pena de cárcel como elemento central de la política criminal.⁵³ En efecto, Chile también tiene un alta tasa de la población encarcelada, 297.9 internos e internas por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca entre los líderes en este indicador en Latino América. Esta condición de hacinamiento repercute en las condiciones de vida de los internos e internas, las que han sido calificadas tanto por la Comisión IDH así como por la Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado, como degradantes, de extrema insalubridad y con deficientes condiciones de agua potable, alimentación e higiene.⁵⁴

46. El INDH valora la reforma al sistema penitenciario que ha impulsado el Estado, así como también destaca la adopción de medidas a corto y largo plazo para mejorar las condiciones carcelarias del país. Sin embargo, existe una tendencia a abusar de la respuesta penal privativa de libertad disminuyendo los beneficios intrapenitenciarios, cuestión que contribuye al aumento de la población penal⁵⁵. Se debe racionalizar la privación de libertad, reformar Gendarmería de Chile y crear Tribunales de Ejecución de la Pena, cambios que no han sido planteados íntegramente en el debate público por parte de las autoridades. En este sentido cabe destacar la aprobación de la Ley 20.603 que establece medidas alternativas a la pena privativa de libertad, lo que da más herramientas a un tribunal para evitar la pena privativa. Con todo es necesario que el Poder Ejecutivo promulgue el reglamento respectivo sin el cual la ley no entrará en vigencia.

Artículo 12. Libertad de circulación

47. **Migrantes.** El Estado de Chile no cuenta con estadísticas oficiales que permitan conocer la cifra de personas migrantes en “situación irregular”, ni cifras que contemplen las variables de origen étnico y racial respecto de los migrantes en general, indispensables para el adecuado desarrollo de políticas públicas y programas dirigidos a esta población. Además, carece de un cuerpo normativo único y claro para todas las personas migrantes. La legislación actual (Decreto Ley 1.094 de 1975), no da cuenta de las nuevas tendencias migratorias y presenta déficits importantes frente a los estándares de derechos humanos. Lo anterior es complejo considerando que en Chile el número de personas extranjeras ha venido en continuo aumento, particularmente de ciudadanos y ciudadanas de otros países de la región⁵⁶. El Instituto espera que en el debate parlamentario se incorporen al proyecto⁵⁷ estándares de derechos humanos, tales como el respeto a la diversidad y expresiones culturales propias de los migrantes; que las distinciones entre calidades migratorias

⁵³ INDH, Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en Chile. 2012. Pág. 143.

⁵⁴ INDH, Informe Anual. Situación de los Derechos Humanos en Chile. 2012. Pág. 87.

⁵⁵ Recomendaciones para una Nueva Política Penitenciaria, Consejo para la Reforma Penitenciaria, Marzo 2010, pág. 23

⁵⁶ En 1982 la población extranjera era de 85.000 personas; en 1992 de 105.000; en 2002 de 185.000 y para el 2010 llegaba a 352.344 personas.

⁵⁷ A través del Mensaje N° 089-361, en junio de 2013 se presentó un proyecto de ley que busca regular integralmente la migración.

(tipos de visados) no constituyan discriminaciones arbitrarias. Es importante además que en dicho debate sean escuchadas las voces de las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil comprometidas con el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de esta población.

48. En este contexto, es un avance en materia de educación que el Estado de Chile asegure a todas las niñas, niños y adolescentes el ingreso y mantención en la educación preescolar, básica y media, con independencia del estatus migratorio de sus padres. Asimismo, en salud, las normas vigentes aseguran la atención médica de urgencia a los inmigrantes en situación irregular, y el acceso de todas las inmigrantes embarazadas y de los/as niños/as y adolescentes, con independencia de su condición migratoria, a la atención de la salud. No obstante, en la práctica el INDH ha constatado que en situaciones la atención de salud en hospitales es supeditada al pago y que en el caso de educación, y los jóvenes migrantes, por ejemplo, no tienen acceso al crédito que otorga el Estado para cursar estudios universitarios.

Artículo 13. Situación de las personas extranjeras con arreglo al Pacto

49. **Migrantes y acceso a la justicia.** El INDH considera que el plazo de 24 horas para presentar un recurso de reclamación en el caso de que un extranjero sea expulsado del país es extremadamente estrecho. Además la normativa permite facultades discrecionales para la autoridad al momento de tomar la decisión de expulsión. Acceder a un recurso judicial efectivo es un derecho fundamental, el cual adquiere especial importancia en el caso de la población migrante teniendo en cuenta las particulares condiciones de vulnerabilidad de aquellos/as que es encuentran en situación irregular y que en muchas ocasiones no cuentan con información suficiente. También preocupa el proceso de extrañamiento para personas privadas de libertad extranjeras que se ha dado en relación a la Ley 20.588 sobre indulto general, la que prohíbe el ingreso al país durante 10 años.

50. Asimismo, preocupa al INDH las privaciones de libertad de las que han sido objeto algunas personas migrantes a la espera de la resolución de su situación migratoria, realizadas fuera del marco jurídico interno. De este modo, el INDH conoció los casos de una mujer colombiana detenida ilegalmente casi dos meses en la Policía de Investigaciones en Arica y de un grupo en situación similar en Santiago. En ambos casos la Corte Suprema determinó la ilegalidad de la detención ordenando su libertad. En el caso de la mujer colombiana, el amparo fue presentado por el INDH⁵⁸.

Artículo 14. Garantías procesales

51. El Estado ha desarrollado políticas públicas e institucionalidad para abordar la situación de exclusión social y política de los pueblos indígenas, con resultados disímiles en la práctica.⁵⁹ El INDH ha sostenido que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas no puede concebirse sin que el primero se haga cargo de los despojos y privaciones que han sufrido dichos pueblos, no sólo en relación con sus tierras, territorios y recursos naturales, sino también en términos del avasallamiento de la identidad política y cultural como consecuencia de la discriminación y la negación histórica de derechos de que han sido objeto.⁶⁰ La demanda insatisfecha de los pueblos

⁵⁸ Corte Suprema, Rol 1346-13, sentencia del 1 de abril de 2013.

⁵⁹ Informe Anual situación de los Derechos Humanos en Chile. 2012. Pág. 61.

⁶⁰ Informe Anual situación de los Derechos Humanos en Chile. 2010. Pág. 97.

indígenas por derechos políticos y territoriales ha generado un clima de tensión y hechos de violencia que han afectado a integrantes de pueblos indígenas, y también a pequeños agricultores, empresarios y otros habitantes de las zonas en conflicto.⁶¹

52. **Ley 18.314 que determina y sanciona conductas terroristas.** Esta ley, que representa una de las respuestas punitivas de mayor intensidad en la legislación chilena, ha sido objeto de modificaciones en el período que se reporta⁶² con el fin de adecuarla a los estándares internacionales. En efecto, la definición del delito terrorista vulnera los principios de legalidad y tipicidad y establece normas excepcionales que constituyen una disminución a los estándares del derecho del debido proceso⁶³.

53. Además de estos problemas normativos, su invocación mayoritaria a grupos discriminados de la sociedad, especialmente el pueblo mapuche, constituyen una preocupación para el INDH. Según datos entregados por el Ministerio Público, entre los años 2010-2011, 48 personas fueron sometidas al régimen procesal de dicha Ley, 32 de las cuales estaban relacionadas o eran integrantes de este pueblo.⁶⁴

54. Un último caso que ha llamado la atención en materia de aplicación de la Ley 18.314 es el denominado “caso bombas”. Continuas explosiones que tuvieron lugar en la Región Metropolitana de Chile (donde se encuentra la capital Santiago), fueron calificadas como terroristas por el Ministerio Público. En la madrugada del sábado 14 de agosto de 2010 se llevó a cabo la denominada “Operación Salamandra” en la que resultaron detenidas 14 personas en Santiago y Valparaíso acusadas de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos en calidad de terroristas. En promedio, la mayoría de estas personas estuvo en prisión preventiva por un período de ocho meses, recluidas en la Unidad Especial de Alta Seguridad (U.E.A.S) de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, con un régimen de encierro y riguroso asilamiento de 22 horas diarias.

55. El INDH cuestionó la aplicación de dicha Ley en el caso, por afectar las garantías del debido proceso asunto que, durante la observación al juicio, se vio reflejado en “el acompañamiento de pruebas orientadas más bien a perfilar la personalidad de los imputados como terroristas, más que a la constatación de los hechos materia de la acusación”⁶⁵. El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, dictó sentencia unánime por la cual se absolvió de los cargos a los seis acusados por los dos únicos delitos en que quedó la acusación: colocación de artefactos explosivos en calidad de terroristas y financiamiento de asociación ilícita terrorista. Igualmente calificó la investigación seguida por el Ministerio Público como incompleta y revestida de un sesgo de parcialidad.

Artículo 19. Libertad de Opinión y Expresión

⁶¹ Diversos incendios de parcelas, maquinaria y otros. En enero de 2013 sucedió un hecho de gran conmoción pública el incendio de la casa y la consecuente muerte de la pareja de ancianos, Bernard Luchsinger y su esposa Vivianne McKay.

⁶² Las últimas dos corresponden a la Ley 20.467 de 8 de octubre de 2010 y Ley N° 20.519 de 26 de junio de 2011.

⁶³ INDH, Informe Anual 2011. Situación de los derechos humanos en Chile, págs. 111-112.

⁶⁴ Un caso ilustrativo de los problemas que presenta la Ley Antiterrorista en su interpretación y aplicación es lo sucedido en el juicio seguido en contra 17 comuneros mapuche en Cañete. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, Causa RUC 0800932994-4.

⁶⁵ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 30.

56. **Acceso a la información.** El INDH valora la adopción de la Ley 20.085 sobre Transparencia y acceso a la información por constituir una regulación específica sobre la materia estableciendo obligaciones para el Estado y creando una institución administrativa específica, el Consejo para la Transparencia, para que vele por el cumplimiento de la nueva normativa.

57. **Medios de comunicación.** En Chile existe una concentración en la propiedad de los medios de comunicación escrita y radio que afecta el pluralismo informativo y, por tanto, el derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión. En prensa escrita impresa existen dos conglomerados periodísticos que concentran la mayoría de los periódicos de circulación nacional y regional⁶⁶. En este escenario los estándares internacionales⁶⁷ establecen que la existencia de medios de comunicación autónomos y pluralistas en una democracia es un aspecto fundamental, ya que inciden en el debate público, informan a la sociedad, y pueden interpelar a las autoridades.⁶⁸ El INDH ha indicado que el Estado debe llevar a cabo acciones que permitan abrir el mercado informativo a voces diferentes a las de quienes concentran la propiedad de los medios.

58. Los medios construyen realidades y desde allí determinan qué hechos son los relevantes de dar a conocer y desde qué perspectiva hacerlo. Los medios de comunicación a través de los mensajes que emiten juegan un rol preponderante en la construcción o el refuerzo de estereotipos de grupos vulnerados. Especial preocupación genera el tratamiento de la noticia y grupos vulnerados, construyendo o reforzando prejuicios sociales y, en esos casos, propiciando el trato discriminatorio.⁶⁹ En este sentido, el INDH ha denunciado al Consejo Nacional de Televisión, durante el período de este informe, situaciones que dan cuenta de ello.⁷⁰

59. En relación a los medios de comunicación y su vinculación con derechos humanos, cabe señalar la ausencia de lo anterior debe dejarse constancia de la vulneración del derecho a la honra de la persona (art. 19, n°5 de la CPR y art. 17 del Pacto) y de la presunción de inocencia del imputado (Art. 4° del Código Procesal Penal y art. 14. 2 del Pacto) que importa la exhibición pública de su imagen por los medios de comunicación masiva en el momento de su detención y antes de toda diligencia procesal. Especialmente grave es este trato considerando el art. 10.1 del Pacto que señala: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano”, como asimismo el artículo 150 del Código Procesal Penal, que refiriéndose a la prisión preventiva dispone en su inciso tercero: “El imputado será tratado en todo momento como inocente”, lo que no se condice con su traslado esposado por espacios públicos, incluyendo el propio tribunal, como es de común ocurrencia en Chile ante los medios de comunicación masivos.

60. Por su parte, las radios comunitarias están reguladas por la Ley 20.433, la que establece un máximo de cobertura y prohibiciones de transmitir avisos comerciales, lo que dificulta su funcionamiento y subsistencia, con lo cual se afecta tanto el derecho a la libre expresión de estos medios, como el derecho de la sociedad a acceder a un pluralismo informativo.

⁶⁶ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 323.

⁶⁷ CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Una Agenda Hemisférica para la Defensa de la Libertad de Expresión, 2010, pág. 33 a 36.

⁶⁸ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 321.

⁶⁹ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 326.

⁷⁰ Oficio N° 312, Pone en conocimiento el parecer del INDH sobre emisión en televisión que se indica de 28 de Agosto de 2012; Oficio N° 311, Pone en conocimiento el parecer del INDH sobre emisión en televisión que se indica de 28 de Agosto de 2012; Oficio N° 168, Interpone denuncia en conformidad a la Ley N°18.383 de 23 de Mayo de 2013.

Artículo 21. Derecho de reunión pacífica

61. **Manifestaciones sociales.** El INDH ha identificado diversos obstáculos para ejercer el derecho a reunión. Por una parte, la Constitución reconoce el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (artículo 19 N° 13) pero entrega la regulación de su ejercicio en lugares públicos a “disposiciones generales de policía”. En la práctica esto significa que su regulación se encuentra establecida en un Decreto Supremo (D.S.) 1.086 de 1983, infringiendo el principio de reserva legal garantizado por los tratados internacionales y la Constitución.⁷¹

62. El derecho de manifestación puede afectar el orden público, y en particular el ejercicio de derechos por parte de terceros. Es labor de la autoridad administrativa y de la Fuerza Pública conciliar la mantención de dicho orden con el ejercicio de los derechos de todas las personas. No obstante, y a pesar de la violencia policial denunciada a este Instituto, se ha constatado que aquellos grupos que en el contexto de manifestaciones cometen delitos muy pocas veces son detenidos y las mayoría de las ocasiones se detiene a manifestantes que se expresaban de manera pacífica, como lo ejemplifican los datos aportados por la Defensoría Penal Pública respecto a detenciones ilegales.⁷² En este sentido, el INDH más de una vez ha reprochado la falta de eficacia policial en la detención de quienes cometen delitos en el contexto de manifestaciones, cuestión que sin embargo no ha mejorado.

63. Un punto que ha concentrado el debate es la discusión acerca del proyecto de ley “que fortalece el resguardo del orden público” (Mensaje N° 196-359).⁷³ El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo en septiembre de 2011 como respuesta a “los saqueos y la afectación a la propiedad privada y pública que ha tenido lugar en los contextos de algunas manifestaciones” y que expone a personas involucradas en marchas espontáneas al riesgo de una pena de hasta 3 años de cárcel. El proyecto agrega una nueva falta y una nueva regla de determinación de la pena respecto a los casos en que los autores de ciertos delitos o faltas los hayan cometido cubriéndose el rostro con el propósito de ocultar su identidad (“encapuchados”). Así se contempla un vínculo entre personas que puedan ser identificadas como “encapuchadas” y los desórdenes públicos o la destrucción de propiedad. La falta de distinción entre quienes se manifiestan pacíficamente y quienes cometen actos delictivos, y el uso de la fuerza de manera desproporcionada, pueden constituirse como un conjunto de prácticas que inhiben el ejercicio a manifestarse pacíficamente, vulnerándose así estándares de derechos humanos en materia de derecho de reunión y libertad de expresión, cuestión que le ha sido representada por las relatorías de Naciones Unidas de Libertad de Expresión, Reunión y Asociación, y Defensores de Derechos Humanos.⁷⁴

⁷¹ Minuta sobre “Las manifestaciones públicas y la protesta social: consideraciones desde una perspectiva de derechos humanos” aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 27 de agosto de 2012– Sesión 111.

⁷² En el Informe Estadístico Anual 2012 la Defensoría Penal Pública señaló que el número de detenciones declaradas ilegales se ha incrementado en los últimos años. En efecto, el año 2008 se declararon 969; el 2009 se declararon 1000; el 2010 se declararon 1207; el 2011 se declararon 2134 y el 2012 se declararon 2892.

⁷³ Minuta sobre Proyecto de ley “que fortalece el resguardo del orden público” aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 20 de mayo de 2013 – Sesión 154.

⁷⁴ El proyecto de ley fue objeto de discusión general el pasado 6 de agosto en la Cámara de Diputados. Fue aprobado en general y particular y remitido al Senado para continuar su tramitación. Si bien fueron rechazados los artículos objeto de preocupación, el Gobierno lamentó la votación de la Cámara de Diputados y anunció que ante el Senado presentarán nuevas indicaciones con el fin de reincorporar dichos artículos.

Artículo 22. Derecho de asociación

64. **Ley de participación.** El INDH ha manifestado que “el Estado, por distintas razones en cada caso, no ha logrado por lo general incorporar en su actuar las voces de organizaciones sociales y de la sociedad civil, ni tampoco las de los pueblos indígenas, generando la persistencia de las demandas y un creciente distanciamiento de las instituciones públicas y sus autoridades. Por ello, uno de los desafíos del Estado es brindar una adecuada respuesta a las mayores y más amplias demandas de participación ciudadana”⁷⁵. En este sentido, respecto a la implementación de la Ley 20.500 a la que el Estado hace referencia, la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales manifestó que “los reglamentos están sin concluir y la ley no puede ser ejercida en plenitud [la que además] no cumple con las expectativas de la sociedad civil organizada para potenciar espacios reales de participación e incidencia política [ni] está a la altura de las necesidades de nuestro país en materia de democracia y desarrollo”⁷⁶.

Respuesta al Párrafo Nº 14 de las Observaciones Finales

65. En Chile hay una tendencia de disminución en los niveles de sindicalización, situación preocupante dado que el sindicato constituye una instancia de protección de los derechos laborales. A esta figura se agregan otras complicaciones como las prácticas anti-sindicales por parte de las empresas. Entre las prácticas más denunciadas se encuentran (i) infracción del artículo 289 del Código de Trabajo que se refiere a prácticas como otorgar beneficios especiales para desincentivar la formación de sindicatos, actos cuyo objeto es evitar la afiliación de un trabajador a un sindicato ya existente o actos de injerencia sindical, entre otros, (ii) obstaculizar formación o funcionamiento del sindicato (amenazas de despedidos o pérdida de beneficios), (iii) no pago cuota sindical, (iv) no pago de permisos sindicales, (v) no otorgar trabajo convenido a dirigente sindical, (vi) separación ilegal del trabajador con fuero sindical, (vii) denuncias por reemplazo y reintegro ilegal de trabajadores en huelga. Los datos indican que a mayor nivel de sindicalización, menores son las denuncias presentadas ante la Dirección del Trabajo⁷⁷.

66. En cuanto al derecho a huelga, debe entenderse en relación con la sindicalización y la negociación colectiva, al constituir el principal medio de negociación para las personas trabajadoras ante sus empleadores. En particular, es en relación con la posibilidad de reemplazo de los/las trabajadores/as por parte del empleador (art. 381 del Código del Trabajo), y la fecha de inicio de la misma, la que debe comenzar tres días después de que los y las trabajadoras voten en su favor (artículo 374 del mismo Código), que se expresan de mejor manera las dificultades que presenta el derecho a huelga en Chile. En cuanto al reemplazo, constituye una herramienta que resta poder de negociación a las y los trabajadores, toda vez que la huelga es una expresión colectiva cuya fuerza se centra justamente en la posibilidad de afectar la producción. Los obstáculos normativos para el ejercicio de la huelga han sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos a Chile, como por ejemplo el Comité DESC, el que instó al Estado chileno a revisar específicamente “el artículo 381 del Código del Trabajo, que prevé la posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga”⁷⁸ y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) que afirmó “La Comisión toma nota de que

⁷⁵ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 105.

⁷⁶ ACCIÓN, Ley de Participación: Una ley sin reglamentos, 2012, párr. 15.

⁷⁷ Dirección del Trabajo. Compendio de series estadísticas 1990-2011. Sindicalización. Obtenido de <http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-propertyvalue-22777.html>

⁷⁸ Comité DESC, Observaciones finales: Chile, 2004, E/C.12/1/Add.105, 26 de noviembre de 2004, párrafo 41.

el artículo 381 del Código de Trabajo prohíbe de manera general el reemplazo de los huelguistas, pero que existe la posibilidad de proceder a dicho reemplazo mediante el cumplimiento de ciertas condiciones por parte del empleador en su última oferta en la negociación.”⁷⁹ Asimismo, el Código de Trabajo (CT) plantea obstáculos para la negociación colectiva, la que por ejemplo, está prohibida para trabajadores/as por obra o faenas transitorias (artículo 305 CT), lo que afecta a una quinta parte de la población trabajadora en Chile. Del mismo modo, el Código expresa que no solo los sindicatos pueden negociar, sino que también las organizaciones de trabajadores que se unan especialmente para ello.⁸⁰

Artículo 23. Protección de la Familia.

67. Sentencia caso Karen Atala. El INDH destaca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile en el caso “Atala Riffo e hijas”, en la cual manifiesta expresamente que no existe una concepción única de familia. Específicamente la Corte planteó que “respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar”⁸¹. Asimismo el fallo establece la obligación del Estado, como medida de reparación, la de capacitar a funcionarios y funcionarias estatales sobre derechos humanos, orientación sexual y no discriminación. Para el INDH esta constituye una medida fundamental como garantía que no se produzcan en el futuro situaciones de discriminación en razón de la orientación sexual de las personas.

68. Sentencia de Amparo contra decreto de expulsión para proteger a la familia. El INDH destaca el fallo de la Corte Suprema acogiendo un recurso de amparo en favor de una ciudadana peruana y sus dos hijos menores de edad, que dejó sin efecto el decreto de expulsión que revocaba el permiso de permanencia definitiva en el territorio chileno por haber incurrido en declaraciones falsas para la obtención del permiso. La Corte Suprema señaló “Que dadas las circunstancias personales y familiares de la amparada, cabe advertir que ellos traen inevitables consecuencias a los otros amparados por el recurso, los menores, ambos hijos de la amparada, de diez y un año, respectivamente, al tener el primero un arraigo ostensible en este país al estar cursando sus estudios formales en el territorio, y un evidente apego con su madre el segundo, dada su corta edad.”⁸² En definitiva, el máximo tribunal tuvo en consideración el deber del Estado de dar una adecuada protección a la familia, así como también propender al fortalecimiento de la misma señalando que son derechos consagrados en instrumentos internacionales y los cuales no se garantizarían si procediera el decreto de expulsión ya que se produciría la disgregación del núcleo familiar.

Artículo 24. Protección de la infancia

69. Violencia infantil. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país se ha visibilizado y algunas de sus manifestaciones han experimentado un notorio y preocupante incremento. Por una parte, existe un aumento sostenido de las denuncias por violencia contra personas menores de 14

⁷⁹ Solicitud directa a Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chile (Ratificación : 1999).

⁸⁰ INDH, Informe Anual 2011. Situación de los Derechos Humanos en Chile, pág. 145 y ss.

⁸¹ Corte IDH, sentencia caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, 24 de febrero de 2012, párr. 172.

⁸² Corte Suprema, sentencia de amparo, 14 de septiembre de 2012, Rol N° 7018-12. Extracto de considerando tercero.

años, a ello se suma que los dos últimos informes sobre violencia intrafamiliar de Unicef (2006 y 2012) muestran que la violencia física grave afecta a 25,9% de los niños/as, no observándose mejoría, y que el 70% ellos/as es víctima de violencia psicológica. En lo que respecta a trabajo infantil, una de las peores formas de violencia contra este segmento de la población, los informes demuestran que ha aumentado entre 2003 y 2012, llegando el año pasado a la cifra de 219.000 (6.9%) niños, niñas y adolescentes en el país. La encuesta indica que 90% de los niños, niñas y adolescentes que trabaja lo hace en trabajos peligrosos por su naturaleza o las condiciones en que se realiza. Preocupa al INDH la carencia de una institucionalidad que permita el diseño y evaluación de políticas públicas de infancia, así como la ausencia de una ley de protección integral de los derechos de niñas y niños. Este déficit institucional, entre otros aspectos, impide contar con un sistema integrado de información que dote de eficacia la acción estatal dirigida a niños y niñas, que permita la adecuada articulación de servicios y garantice su acceso universal.

70. En cuanto a responsabilidad penal adolescente, se ha constatado transversalmente que la actual legislación (Ley 20.084) no ha logrado hacer efectiva la responsabilidad de los/as adolescentes por la comisión de infracciones penales de forma tal que "la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social" (art. 20). El INDH ha manifestado su preocupación por el uso de la privación de libertad como medida inmediata para los/as jóvenes infractores de ley, aun cuando la legislación establece que se aplique solo en casos excepcionales. Por otro lado, existe un porcentaje importante de adolescentes a los que se fija una medida cautelar en régimen cerrado durante el proceso penal y, al finalizar éste, se determina una medida en el medio libre; el daño causado con la privación de libertad se puede evitar con las medidas cautelares ambulatorias. En general, se promueven poco las salidas alternativas como los acuerdos reparatorios entre víctima y ofensor adolescente mediante procesos de mediación o las suspensiones condicionales del proceso.

71. Preocupa al INDH que los centros de SENAME en los que los/as adolescentes cumplen medidas y sanciones privativas de libertad, no satisfacen los estándares mínimos en términos de infraestructura, salubridad, acceso a tratamiento de salud física y mental, personal idóneo y capacitado, y plan amplio socioeducativo que fomente la inclusión social de los/as adolescentes, entre otros. Asimismo, se ha constatado que algunos centros no funcionan con la autorización correspondiente del Ministerio de Salud. En esta línea, el 2 de agosto del 2012 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley⁸³ que modifica la institucionalidad de infancia y adolescencia en Chile, concretándose el compromiso del Estado de respetar, garantizar y proteger los derechos de niños y niñas a través de instituciones modernas. Esta iniciativa legal busca suprimir el actual SENAME, canalizando sus facultades en dos servicios independientes: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Lo anterior con el propósito de mejorar la gestión y otorgar efectiva garantías para los derechos de niños, niñas y adolescentes.⁸⁴

⁸³ Mensaje Nº 31-360 (Boletín 8487-07), que suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y la adolescencia. A la fecha de redacción de este Informe, el proyecto se encontraba en primer trámite constitucional en el Congreso.

⁸⁴ El 30 de abril del 2013 el Gobierno a través del Mensaje Nº 066-361 presentó el proyecto de Ley Protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (Boletín 8911-18). La iniciativa, enviada para su estudio a la Comisión de Familia, responde al requerimiento planteado por un grupo de diputados como condición para debatir el proyecto de división del SENAME. De este modo, la reforma al Servicio quedó sujeta a la discusión de una propuesta integral para la niñez.

Artículo 25. Derechos políticos

72. **Derecho a sufragio.**⁸⁵ En Chile, el artículo 13⁸⁶ de la Constitución Política de la República de Chile (CPR) define quienes son ciudadanos y los derechos que dicha calidad otorga, asimismo la suspensión y pérdida del derecho a sufragio están definidas en la Constitución. Si bien la CPR y la Ley Orgánica Constitucional 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios reconocen el derecho a sufragio, el INDH ha manifestado su preocupación en dos ámbitos específicos que afectan el ejercicio del derecho a voto de nacionales en el extranjero y de las personas privadas de libertad.

73. Respecto al voto de nacionales en el extranjero, pese a ser un tema que se ha planteado en el debate público, no ha habido avances en el período reportado que permitan que los aproximadamente 850.000 chilenos/as que viven en el extranjero puedan ejercer su derecho a sufragio. Al respecto, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en su Informe al Estado de Chile, recomendó “retomar las iniciativas ya emprendidas con miras a permitir que los emigrantes chilenos que trabajan en el extranjero puedan ejercer su derecho de voto en las elecciones organizadas en el Estado parte”⁸⁷. Recientemente⁸⁸ el Congreso Nacional ha retomado la discusión de los proyectos de ley⁸⁹ sobre la materia que no presentaban avances en el debate legislativo desde 2011.

74. En cuanto a las personas privadas de libertad, el Art. 16 de la CPR establece que este derecho se suspende, entre otros motivos, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva⁹⁰ o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Del mismo modo, el Art. 17 señala que la calidad de ciudadano se pierde –y por tanto, el correlativo derecho a sufragio– por condena a pena aflictiva o condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes que hubieren merecido pena aflictiva. Así, por mandato constitucional, la persona acusada de un delito –esté o no en prisión preventiva– o condenada a una pena privativa de libertad menor a tres años y un día, puede, de acuerdo a la legislación interna ejercer su derecho a sufragio.⁹¹ Sin embargo, en la práctica, y producto de una reciente modificación que establece la inscripción automática, este derecho se ve obstaculizado por la no existencia de mesas electorales en los recintos penitenciarios. Asimismo, el INDH ha recibido denuncias sobre la no existencia de mesas electorales en algunas zonas del país, como por ejemplo, el sector de “Bajos de Mena”⁹², al sur de la Región Metropolitana. Es deber del Estado

⁸⁵ El 19 de Junio de 2013 entro en vigor la Ley Núm. 20.678 que Establece la elección directa de los Consejeros Regionales.

⁸⁶ “Artículo 13.- Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran”.

⁸⁷ Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Observaciones Finales: Chile, 2011, CMW/C/CHL/CO/1, párr. 49.

⁸⁸ Agosto 2013.

⁸⁹ Proyectos de Ley boletines N° 7335-07 y 6950-07.

⁹⁰ Son penas aflictivas: a) Todas las penas de crímenes; b) Todas las penas de simples delitos que se sancionen con presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menor en su grado máximo. Artículo 37 del Código Penal.

⁹¹ INDH, Informe Anual 2012. Situación de los derechos humanos en Chile, pág. 145

⁹² Servicio Electoral Oficio N° 4377 sobre locales de votación en la comuna de Puente Alto. 28 de mayo de 2013, pág. 2. Se indica que no existe mesa electoral en el sector y “Para una futura solución, se está requiriendo a la Municipalidad de Puente Alto, informe demográfico, de infraestructura y de servicios con los que dispone el sector en comento, para decidir por parte de esta Dirección, de acuerdo a la evaluación correspondiente, la creación de una circunscripción electoral en el lugar Bajos de Mena, lo que permitiría la existencia de locales de votación”.

adoptar todas las medidas correspondientes para que todas las personas que deseen y cumplan con los requisitos legales, puedan votar.

Artículo 26. Igualdad ante la ley y no discriminación

75. En relación al artículo 26 del Pacto y el derecho de toda persona a la igualdad frente a la ley, el INDH ha manifestado su preocupación principalmente a través de sus informes anuales sobre la situación de discriminación que sufren un conjunto de grupos vulnerados, los que se ven impedidos de ejercer libremente sus derechos. A saber:

76. **Personas con discapacidad.** En relación a las personas con discapacidad, en 2010 se publicó la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad y que con la cual el país se dotó de una sólida normativa que recoge los principios y estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos de protección de personas con necesidades especiales. Con todo, información recolectada por el INDH en el área de salud y trabajo permite afirmar que persisten obstáculos serios para su efectiva inclusión social.

77. En materia de salud, el INDH ha planteado que las iniciativas estatales que abordan el derecho a la salud de las personas con discapacidad dicen relación fundamentalmente con la atención médica a patologías, la rehabilitación y la entrega de ayudas técnicas, quedando fuera ámbitos relevantes para la atención integral en salud como la prevención y la promoción. En materia laboral, existe una escasez de fuentes laborales dependientes junto al papel inhibitor que juega la estigmatización en la inserción laboral, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad mental. A esto se suman procesos de selección que no están adecuados para las personas con discapacidad y requisitos que merman su participación en éstos, como por ejemplo la falta de validación de sus estudios o la aplicación de pruebas estandarizadas.

78. **Adultos/as Mayores.** Existen una serie de leyes especiales aplicables a su situación, fundamentalmente en los ámbitos de la salud, el trabajo, de la previsión y seguridad social, y la violencia. El INDH considera que la reciente eliminación del descuento del 7% de los aportes al sistema público y privado de salud para las personas adultas mayores en situación vulnerable es un avance importante de destacar.

79. Para el INDH es relevante que el Estado lleve a cabo políticas públicas en esta materia desde un enfoque de derechos humanos que sitúe a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, y no enfocadas desde el asistencialismo.

80. Además, preocupa algunas situaciones específicas de maltrato contra personas adultas mayores en ciertos establecimientos de larga estadía. En Chile existen 664 Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) autorizados legalmente para su funcionamiento y se estima que existirá una cifra similar que funciona ilegalmente. El INDH en un proyecto piloto visitó 14 centros con el objeto de fiscalizar las condiciones en que viven estas personas donde constató que la cantidad de cuidadores/as no era suficiente para atender la diversidad de cuidados y la complejidad de algunas patologías. Además, se observaron personas amarradas en siete ELEAM, hechos que en dos casos fueron justificados aludiendo a la necesidad de modificaciones posturales y otras razones médicas. Es tiempo de dar cumplimiento al compromiso del Estado de Chile, de crear un mecanismo

nacional para la supervisión y evaluación de establecimientos públicos o privados en los que personas adultos/as mayores se encuentran bajo custodia.

81. Diversidad Sexual. La Ley 20.609 establece medidas contra la discriminación para los derechos humanos de las diversidades sexuales y prohíbe la discriminación tanto por orientación sexual como por identidad de género. Asimismo, en el período que cubre este informe se adoptó la Circular 34 del Ministerio de Salud que establece una política de atención a las personas trans⁹³, y se presentó el proyecto de ley que busca establecer el “Acuerdo de Vida en Pareja”, que tiene por objeto el reconocimiento legal de las uniones de hecho de personas de iguales o distintos sexos. En efecto, si bien las uniones de hecho tienen en la actualidad impacto jurídico⁹⁴, no es menos cierto que no gozan de un status jurídico que les permita el acceso integral al ejercicio de derechos civiles, económicos y sociales.

82. No obstante lo anterior, las diversidades sexuales en Chile aún se ven enfrentados a obstáculos normativos y sociales discriminatorios. Principalmente durante el año 2011 el asesinato de Cinthia González Rodríguez, mujer transexual en Calama en julio, la brutal agresión a Sandi Iturra en Valparaíso en junio, y el incendio intencional de cuatro mediaguas en las que vivían transexuales miembros de la agrupación Transgéneras por el Cambio en Talca, ocurrido en septiembre, marcaron la pauta de agresión. A lo anterior, se debe sumar el homicidio de Daniel Zamudio en un lugar público en razón de su orientación sexual.

Artículo 27. Derecho de las minorías

83. El Estado chileno ha realizado esfuerzos para implementar programas que resguardan los derechos que emanan de este artículo. No obstante lo anterior, no se ha podido avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas pese a existir una solución amistosa acordada por el Estado en el caso Huenteeo Beroiza el 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien existe un proyecto de ley en el Congreso Nacional con apoyo transversal que se encuentra desde 2009 en el primer trámite constitucional⁹⁵, existen discrepancias importantes respecto a la forma que consagra el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos.⁹⁶ Finalmente, el proyecto no ha sido objeto de consulta en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT y del cual Chile es parte.

84. Respecto a la participación política, los pueblos indígenas también han enfrentado obstáculos en su ejercicio. En efecto, estos pueblos no cuentan con representación en el Congreso Nacional, y su participación en los gobiernos comunales, si bien se ha incrementado en los últimos años, aun sigue siendo baja respecto de su población, en particular en regiones de alta demografía indígena,

⁹³ El Director del Servicio Médico Legal emitió un Oficio de distribución general que instruye el cumplimiento de la Guía Técnica Pericial de Sexología Forense para casos de personas trans e intersex. Ordinario Circular N° 1297/2012 de 9 de noviembre de 2012.

⁹⁴ En el ordenamiento jurídico chileno no existe un reconocimiento expreso a estas relaciones, pero sí existen diversas normas que reconocen, de modo más o menos explícito, el estado de conviviente para asignar algún efecto jurídico. Así, una vez acreditado los requisitos que configuran una unión de hecho, se producen efectos jurídicos en las siguientes situaciones: al término de la relación de convivencia y la necesidad de distribuir los bienes que se han adquirido durante la vigencia de esta; respecto a la legitimación activa para solicitar la indemnización por daño moral en caso de ilícito que causa la muerte del conviviente; en caso de quienes pueden ejercer la violencia contra la mujer se reconoce a los convivientes; y para acceder a ciertas prestaciones de políticas sociales.

⁹⁵ Boletines 5324-07 y 5522-07.

⁹⁶ INDH. Informe Anual situación de los Derechos Humanos en Chile. 2012. Págs. 62 a 66.

como La Araucanía. Por otro lado, las exigencias establecidas en la ley de partidos políticos – entre ellas inscribirse en a lo menos tres regiones contiguas, y reunir cerca de 5 mil firmas legalizadas y pagadas de adherentes- si bien aplicables a toda la población, hacen muy difícil a los pueblos conformar un partido político para participar en forma autónoma en los procesos electorales⁹⁷.

85. Un segundo problema es lo referente a la institucionalización y operatividad del derecho a la consulta previa. En Chile la consulta ha estado regulada por el Decreto 124 del Ministerio de Desarrollo Social que restringe las medidas y las materias a consultar, y los plazos establecidos difícilmente resultan suficientes respecto de la naturaleza y envergadura de las materias puestas a consideración de los pueblos concernidos⁹⁸. El INDH ha sostenido que tratándose de medidas legislativas y administrativas que afecten a pueblos indígenas, se debe garantizar la efectiva implementación del derecho a consulta previa y participación⁹⁹. En 2012 el Poder Ejecutivo dio a conocer una nueva propuesta de regulación de la consulta, la que conforme a la opinión del Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya,¹⁰⁰ no satisface los estándares internacionales en varios aspectos de relevancia y requiere ser sustancialmente mejorada.¹⁰¹

86. Respecto al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este juega un rol fundamental toda vez que existe una importante presión derivada de la necesidad de contar con nuevas fuentes energéticas en el país y el interés en la explotación de recursos naturales emplazados en tierras y territorios indígenas¹⁰². Dado que, por disposición de la Ley medioambiental no todos los proyectos deben ser evaluados por el SEIA, el reglamento recientemente aprobado no regula la consulta de los proyectos que no se someten a dicho sistema. Sobre este reglamento el INDH llamó la atención sobre la necesidad de aumentar la regulación legal de la consulta indígena, debido a que la legislación medioambiental sólo dedica un artículo a tan importante asunto¹⁰³. Por otra parte, el INDH valoró los esfuerzos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en orden a realizar un proceso de diálogo y recordó que,

⁹⁷ Es el caso del partido mapuche en formación, Wallmapuwen, el que desde hace años viene intentando legalizarse sin poder hacerlo por no poder cumplir con los requisitos de dicha ley. A ello cabe agregar que por decisión del Servicio Electoral sus estatutos debieron eliminar vocablos propios del *mapuzugun* (idioma mapuche) y conceptos alusivos a derechos indígenas que a juicio de esta entidad resultan inconstitucionales, tales como la denominación “pueblo” (como criterio de autoidentificación colectiva), autonomía (en relación al derecho a la autodeterminación), o *Wallmapu* (como denominación del territorio ancestral mapuche).

⁹⁸ INDH. Informe Anual situación de los Derechos Humanos en Chile 2010. pág. 101.

⁹⁹ INDH. Informe Anual situación de los Derechos Humanos en Chile. 2010. pág. 165.

¹⁰⁰ Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile. Noviembre de 2012. Consultado en <http://www.politicaspUBLICAS.net/panel/re/docs/1654-comentario-reglamento-chile.html>

¹⁰¹ El INDH participó como observador de la “Mesa de Consenso para discutir la propuesta de gobierno para una nueva normativa de consulta y participación indígena, de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la OIT” la cual funcionó de marzo del 2013 a julio del mismo año con el propósito de lograr el acuerdo con los pueblos indígenas sobre un nuevo texto de reglamento. La instancia no alcanzó acuerdo en relación a tres aspectos claves: conceptos de afectación directa, medidas que deben ser consultadas y procedencia de consulta respecto a proyectos de inversión en tierras y territorios, indígenas.

¹⁰² Publicado en el Diario Oficial de 13 de agosto de 2013, después que la Contraloría tomó razón de él. El instrumento entrará en vigencia el 24 de diciembre de 2013.

¹⁰³ “El Deber de consulta Previa en la Propuesta de Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental”, Minuta aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 13 de mayo de 2013, Sesión Extraordinaria 152, páginas 19-21.

independientemente de la magnitud del proyecto de inversión en tierras y territorios indígenas, las medidas que sean susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos deben ser consultadas¹⁰⁴. Asimismo, el INDH subrayó que para asegurar la compatibilidad de la consulta con el Convenio 169 debe garantizarse que todo proyecto susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas ingrese efectivamente al SEIA como Estudio de Impacto Ambiental y que se realice la consulta en conformidad con los estándares intencionales que rigen la materia.

Respuesta al Párrafo Nº 19 de las Observaciones Finales

87. El Estado chileno ha logrado importantes avances en materia de los derechos sobre las tierras de las comunidades indígenas, particularmente con su Fondo de Tierras Indígenas de CONADI, el que ha comprado y entregado una significativa cantidad de tierras a personas indígenas. Pese a estos logros¹⁰⁵, el INDH, en consistencia con lo señalado por la el Relator de la ONU sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas (2009) y por el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (2012), ha recomendado al Estado utilizar los mecanismos existentes en la legislación para la restitución de tierras, o adecuarlos cuando sea necesario, a objeto de garantizar una pronta y efectiva restitución de tierras tradicionales indígenas, según entiende por ellas el derecho internacional de los derechos humanos. Los pueblos indígenas deben tener la oportunidad de participar y de ser consultados en las medidas administrativas y legislativas que sean adoptadas por el Estado para estos efectos.¹⁰⁶

88. Por otra parte, dado que el tema de restitución de tierras es una de las principales fuentes de conflicto, debe evitarse la utilización exclusiva del proceso penal como respuesta. Del mismo modo, el INDH ha recibido denuncias de hechos de violencia policial hacia pueblos indígenas ante ocupaciones de predios sobre los que alegan derechos ancestrales. En algunos de tales hechos también se ha ejercido violencia contra niños y niñas indígenas, lo que ha merecido el reproche de los tribunales de justicia.¹⁰⁷

¹⁰⁴ “El Deber de consulta Previa en la Propuesta de Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental”, Minuta aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 13 de mayo de 2013, Sesión Extraordinaria 152, páginas 24 y sgtes.

¹⁰⁵ La relevancia de una política de tierras indígenas consistente con las directrices del derecho internacional de los derechos humanos ha sido constatada recientemente por el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, el que en sus observaciones al Estado de Chile el 2013 manifestó su preocupación al respecto al señalar: “Teniendo en cuenta la persistencia de una situación que no cumple con el Convenio, la Comisión reitera su pedido al Gobierno para que informe en su próxima memoria de manera detallada sobre la adecuación con el Convenio del mecanismo de regularización de tierras y su procedimiento de solución de conflicto. Conferencia Internacional del Trabajo. Aplicación de las normas internacionales del trabajo, 2013 (1). Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 1A), Informe General y observaciones referidas a ciertos países. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2013.

¹⁰⁶ Recomendaciones de la Comisión de Derechos Pueblos Indígenas del INDH. 2012.

¹⁰⁷ Corte de Apelaciones de Temuco. Rol 1136-2011. Sentencia de 21 de diciembre de 2011. Considerando 5. La sentencia fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema, Rol 35-12, de cinco de enero de 2012.

General Considerations

1. Since democracy was re-established in 1990, Chile has undergone a process of democratic deepening, exemplified by a combination of substantive and procedural regulatory reforms. Examples that should be noted from the last few years include: the Participation Law (No. 20.500, 2011); the law that established measures against discrimination (No. 20.609, 2012); the law that created the National Human Rights Institute (INDH) (No. 20.405, 2009); the law that determines Automatic Registration, Amends the Electoral Service and Modernizes the Voting System (No. 20.568, 2012); as well as the creation of spaces for public debate and the establishment of mechanisms enabling greater access to justice and public information.

2. Nevertheless, social inequality and discrimination in Chile continue to affect the exercise of rights, including civil and political rights. Numerous vulnerable groups across society, such as indigenous peoples, older persons and women, among others, have experienced discrimination in terms of their exercise of civil and political rights: rights to which they are guaranteed and to which the State is obliged to act as guarantor. The lack of constitutional recognition for indigenous peoples, cruel treatment of older persons in long stay residential units, verification of situations of torture in prisons and violence against women on the grounds of gender are just some of the examples confirmed by the INDH.

3. Since 2009, a number of legislative difficulties have surfaced regarding citizens' demands for political, economic, social and cultural rights. This movement has included large-scale public demonstrations demanding change for effective citizen participation and the need for new institutional agreements allowing for a fuller exercise of rights.

4. Within this context, the INDH, an autonomous State body created in 2009 by Law 20.405, the principal mission of which is to promote and protect the human rights of all people living in Chile, presents the following Report on the progress and pending areas concerning the establishment and exercise of civil and political rights in Chile.

Observations on the Initial State Report on ICCPR Compliance

5. Article 1. Right of peoples to self-determination

In the field of international law concerning indigenous peoples, the principal of self-determination is recognized in the context of the integral and sovereign nature of the nation-state. The relationship between the State and indigenous peoples in Chile needs addressing from the perspective of collective rights and the rights of the collective's constituent members. This implies

the need to incorporate the diversity of Chilean society within public policy, in order to establish intercultural relations based on the respect and guarantee of rights.

Article 2. Guarantee the protection of the rights set out in the Covenant

6. Law that establishes anti-discrimination measures. As noted by Chile, one of the most important forms of progress during the period was the July 2012 passage of Law 20.609. The INDH has stated that, despite the significance of the legislation, there remain areas in need of reform. These are mainly related to incorporating within the legislation the State's obligation to adopt different types of measures, including those relating to positive discrimination, ensuring that the current formal and substantive inequality gap is resolved and allowing for all persons or groups facing discrimination to exercise their rights equally. Similarly, the legislation fails to set out preventive anti-discrimination measures, as this issue requires the elimination of labelling, stereotypes and cultural practices that are discriminatory in nature.

7. National Human Rights Institute. The enactment of Law 20.405 on 11 November 2009, establishing the creation of the National Human Rights Institute, has been one of the most significant steps in permanently institutionalizing human rights. Nonetheless, the INDH has stated that in order to fully comply with the Paris Principles, it is necessary for the State to strengthen the institution in terms of reinforcing budgetary areas and broadening its powers to ensure greater competence and, therefore, to allow it to fulfil its mandate more effectively. In fact, on its previous mission to the country, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances recommended that Chile "Reinforce the independence, resources and capacity of the National Human Rights Institute, in accordance with the Paris Principles"¹.

8. Undersecretary of Human Rights. The State is currently discussing a bill to establish an Undersecretary of Human Rights, who would form a subsidiary part of the Ministry of Justice. This post would be charged with designing, coordinating and implementing public policies to guide the content and organization of State action in the field of human rights. As well as valuing this bill, the INDH has stated that the creation of a position with such a mandate must not diminish the Institute's own role and abilities². This requires the legislation to be designed in such a way so as to avoid duplicating functions and to enable the two bodies to coordinate efficiently between one another. Similarly, in terms of the right to truth regarding large-scale, systematic and institutionalized human rights violations, the INDH has indicated that the Undersecretary should be granted the powers to identify and document cases of human rights violations relating to victims who disappeared in detention, were executed for political reasons, and were survivors of political imprisonment and torture during the dictatorship³.

Article 3. Gender equality

9. Labour market and equality. Women's participation in the labour market has increased, but it remains low at the regional level, and more women than men still work under precarious

¹ Working Group on Forced or Involuntary Disappearances, Mission to Chile, 2013, A/HRC/22/45/Add.1, page 19.

² INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 93. INDH, Resolution on the Undersecretary of Human Rights Bill, June 2012.

³ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 94.

conditions of part-time employment or without a work contract⁴. According to the National Institute of Statistics (INE), out of the total population old enough to work, 72.4% of men are in employment, compared to 46.7% for women⁵. The World Economic Forum's 2012 Global Gender Gap Report ranks Chile in 127th place (out of 135 countries) concerning the difference in salary between men and women undertaking the same type of work⁶. The INE has stated that, "the salary gaps between women and men are high and exist across all occupational groups, sectors and work categories"⁷.

10. Pre- and post-natal care. Law 20.545 regarding the extension and increased flexibility of pre- and post-natal care is a step forward in the recognition of flexibility as a way of helping women reintegrate themselves into the labour market. In turn, this lends more importance to the paternal role played in raising and caring for the child, thus promoting greater equality in terms of the traditional roles usually assigned to women. Nonetheless, although the new legislation enables the couple to decide which of the two will undertake post-natal care during the period following the first three months, in practice, according to the Superintendency of Social Security, up to 31 December 2012, out of the 111,584 parental grants paid out, only 290 were taken up by men⁸.

11. Existing legislation should take account of women with no formal links to the labour market, given that studies show that a high percentage of women have unstable jobs. The Ministry of the National Bureau for Women (SERNAM) has documented that up to the end of 2011 this figure was 47.8% (26 percentage points lower than for men), and that 63% of the 211,000 jobs created during this year were filled by women. However, SERNAM is concerned that most of these jobs correspond to precarious and unstable employment, in line with the trend across the decade. Specialized agencies warn that 47% of these women's jobs are independent and that 34% correspond to salaried employment: "The independent work documented during this period is mainly unstable, with high amounts of part-time labour and positions being filled by low-skilled workers". Of the salaried employment, 100% relates to "sub-contracting, transitory services and the supply of workers and recruitment, which implies greater precariousness and instability in the world of work"⁹.

12. Right to sexual and reproductive health. During this report's period of scope, the Law Outlining Information, Guidance and Services to Fertility Control was enacted, including the adoption of the respective regulation¹⁰. It is hoped that this law will resolve the problem of access to emergency anti-contraception, which was only available in 77.8% of Chilean Municipalities:

⁴ Woman Community, *Woman and Work: The challenge of respectable work*, 2011, page 6. "83% of men claimed to have a work contract, compared to 72% of women. Similarly, the figure for men working on permanent contracts (67%) is ten percentage points higher than for women (57%). We can see that non-full-time work, such as part-time employment, is more common among women than men: 6% for men and 20% for women". See also the United Nations Development Programme, *Human Development in Chile 2010. Gender: The challenges of equality*, page 111.

⁵ National Institute of Statistics, *Employment status of working women and salary gaps across the Chilean labour structure*, 2011, page 56.

⁶ World Economic Forum, *The Global Gender Gap Report*, 2012, page 144.

⁷ National Institute of Statistics, *Employment status of working women and salary gaps across the Chilean labour sector*, 2011, page 96.

⁸ More information is available at: www.suseso.cl

⁹ Employment foundation *Fundacion Sol Minuta*, No. 4, July – September 2011. Unit of Employment Statistics.

¹⁰ Ministry of Health, Decree No. 49 published in the Official Gazette, 28 March 2013. Legislation passed relating to exercising the right to receive education, information and training in the field of fertility control.

10.9% of local authorities failed to comply with their legal obligation aimed at tackling the reality of teenage pregnancy¹¹.

13. Political Participation.¹² Female representation among popularly elected positions stands at 13.7%, well below the 26% average of the Organization for Economic Cooperation and Development country members. One of the most concerning issues is the current binominal electoral system used in Chile for legislative elections, which constitutes an objective obstacle to the participation and election of women.¹³ The INDH has stated that, in light of the few options for presenting one's candidacy allowed by the system, political parties select candidates that have already been tested ("sure things"), the majority of whom are men. In fact, 90.3% of the candidates presented to the electorate by political parties between 1989 and 2005 have been male. The system also causes high rates of re-election, thus impeding the emergence of new candidates, among them women¹⁴. The CEDAW Committee has repeatedly insisted that Chile intensify "its efforts to reform the binominal electoral system, which is unfavourable for women's political representation, and take measures, in particular temporary special measures, aimed at accelerating de facto equality between women and men in order to increase the participation of women in political life, particularly in parliament and municipalities"¹⁵.

14. Joint property marital regime. The joint property marital regime, to the extent that it is enshrined as the supplementary patrimonial regime of marriage, places the woman in a situation of inequality, given that it is a regime explicitly discriminatory against women.¹⁶ Chile agreed to legally amend this patrimonial practice before the Inter-American Commission on Human Rights, in the case of *Sonia Arce vs. Chile*¹⁷. In its Fifth Periodic Review, the Human Rights Committee recommended Chile "should hasten the adoption by the Senate of the act repealing the joint property marital regime and replacing it with a community property regime"¹⁸. Similarly, in 2012 the CEDAW Committee recommended Chile "expedite, within a clear timeframe, the enactment of Bill No. 7567-07 amending the Civil Code and other laws governing the matrimonial property regime (,) ensure that the new matrimonial regime guarantees equal rights to women and men (...) and ensure that women are provided with information that enables them to make an informed choice"¹⁹. The aforementioned bill is currently being debated in the Senate, in the second constitutional stage of the legislative process, with a simple urgency status.

Article 6. Right to life

¹¹ The main deducible reason for failing to provide this medication is not having any in-stock (31.4%), as well as lacking in human resources (17.1%). Dides, Claudia, Benavente, Cristina, Saez, Isabel, Compliance with Law 20.418: Preventing teenage pregnancy, sexual education and emergency contraception, published by the Development Research Programme of the Faculty of Health Sciences, University of Chile, pages 35 and 36.

¹² Recently, in July 2013, debate began in the Senate concerning three bills proposing amendments to the electoral system, two instigated by Parliament and one sent by the Executive branch; In April 2013 Law 20.640 was enacted, which "Establishes the system of primary elections to nominate Presidential candidates, Members of Parliament and Mayors".

¹³ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 134.

¹⁴ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 134.

¹⁵ Expressed in 2006 (CEDAW/C/CHL/CO/4, par. 14) and reiterated in 2012 (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, par. 24).

¹⁶ INDH, 2010 Annual Report: Human Rights Situation in Chile 2010, page 82.

¹⁷ Inter-American Commission on Human Rights, *Sonia Arce vs. Chile* case, No 12.433.

¹⁸ Human Rights Committee, Concluding Observations. Chile, 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, par. 17.

¹⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations. Chile, 2012, CEDAW/C/CHL/CO/5-6, par. 47 (a).

15. **Femicide.** There were 299 femicides in Chile between 2007 and 2012, according to SERNAM²⁰. While this figure has been decreasing over the last few years (49 in 2010; 40 in 2011 and 34 in 2012), femicide is still a reality that violates women's right every single year, committed solely on the grounds of the victim being a woman. It requires all the State's efforts to investigate and hold to account those responsible, coupled with punishments to guarantee the crime is not repeated.

16. A positive step forward in this area is the coming into force in 2010 of Law 20.480, which establishes the crime of *femicide* in the context of parricide. The law seeks to protect the right to life by recognizing the severity of this type of violence, as well as allowing for different treatment; both of which are fundamental to the crime's prevention. The legislation could be strengthened by taking into account murders committed for reasons of gender different to those recognized on a more formal level. For example, relationships in which partners do not cohabit or do not have children together, or sexual assaults resulting in death committed by persons known or unknown to the victim²¹. It should be noted that the legislation establishing anti-discrimination measures amends the Penal Code and sets out as aggravating factors the committing of, or participation in a crime motivated by, among other reasons, the sexual orientation, gender identity or sex of the victim.²²

Response to Paragraph No. 8 of the Concluding Observations:

17. **Abortion.** Regarding abortion, the Penal Code approves with the force of law "maliciously causing an abortion... 1st – With a sentence of medium-term imprisonment in its minimum degree (from 5 years and a day to 10 years) if violence is committed against the person of the pregnant woman²³; 2nd – With a sentence of short-term imprisonment in its maximum degree (from 3 years and a day to 5 years) if, although not performed, it is caused without the consent of the woman; 3rd – With a sentence of short-term imprisonment in its medium degree (from 541 days to 3 years), if the woman is consenting" (art. 342). A woman aborting or consenting to an abortion is punished by at least short-term imprisonment in its maximum degree, except when it is done to hide the woman's shame, in which case the sentence is reduced to short-term imprisonment in its medium degree (art. 344). A doctor who "abuses their profession by causing or cooperating in an abortion, shall be subject to the respective punishments outlined in article 342, increased by one degree". The Fifth Section of the Health Code regulating "the exercise of medicine and related professions" states that "(n)o action shall be carried out which gives rise to an abortion" (art. 119). Despite abortion being criminalized since 1989, the State has not adhered to recommendations²⁴ made from different bodies charged with the supervision of treaties. Bills have been introduced proposing reforms to existing legislation, concerning the regulation of abortion in cases of risks to the life and health of the mother, for reasons of serious malformation of the foetus incompatible

²⁰ More information is available at: www.sernam.cl

²¹ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 127.

²² Art. 17, Law 26.609, 2012.

²³ The sentence increases to medium degree if the pregnancy is visible or known to the aggressor (art. 343).

²⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations. Chile, 2012, CEDAW/C/CHL/CO/5-6, par. 35 (d) "Review its existing legislation on abortion with a view to decriminalizing it in cases of rape, incest or threats to the health or life of the mother". Similarly, the CESCR recommended Chile "53. ... The Committee recommends that the State party revise its legislation and decriminalize abortion in cases of therapeutic abortions and when the pregnancy is the result of rape or incest". E/C.12/1/Add.105, 26 November 2004, par. 53.

with life and for rape. No agreement has been reached on this topic within the context of parliamentary debate²⁵.

Response to Paragraph No. 9 of the Concluding Observations:

18. Large-scale, systematic and institutionalized violations (1973 – 1990). In its annual reports, the INDH has frequently highlighted the State's duty to investigate, punish and provide reparations to victims of the large-scale, systematic and institutionalized human rights violations committed during the dictatorship. The first of these is to comply with the judgement passed by the Inter-American Court of Human Rights against Chile in the case of Almonacid Arellano, in which the Court established the obligation to revoke Decree Law 2.191, known as the "Amnesty Law"²⁶. The response of the Judiciary²⁷ should be noted in terms of amending and abiding by the Court's ruling, as it has stated the need to "investigate, identify, try and, in this case, prosecute those responsible for the extra-judicial execution of Mr Almonacid Arellano (...)"²⁸.

19. The State mentions two legislative bills which, if passed, would exclude the application of the Amnesty Law. One of these is the "Interpretive law bringing Chilean criminal legislation in line with international human rights treaties" (Official Gazette No. 6422-07). Since June 2011, this bill has been in the second constitutional stage of the legislative process with a non-urgent debate status. The second bill is "the law to amend article 675 of the Criminal Procedure Code, which establishes new revision grounds in cases of human rights violations" (Official Gazette No. 6491-07). This bill is currently in the first constitutional stage of the legislative process with a non-urgent debate status. In summary, the two initiatives noted by the State have not been prioritized for Congressional debate or approval.

20. While the INDH has stated that, since 1998, the Supreme Court has passed its judgements without the application of Decree Law 2.191, and declared these crimes as imprescriptible, it remains important to point out that sentences in Chile only have effect between the parties involved. Regardless of however open it may be, as long as this legislation exists its application remains available to the courts.

21. The INDH praises the gradual progress made in terms of assigning criminal responsibility for crimes committed during the dictatorship. Up to September 2012, 814 ex-officials, the majority of whom belonged to the Chilean army (358) and police (266), had been tried and convicted. Nonetheless, it should be noted that, in terms of criminal conviction, the application of judicial-criminal types of sentencing like the use of prescription, have diminished legal punishments and violated the principle of proportionality regarding the damage caused. This means that a total of

²⁵ Rejected bills include: 1) On therapeutic interruption to a pregnancy (Official Gazette 6522-11), introduced in May 2009; 2) Amending the Health Code to include instances for which a pregnancy can be interrupted (Official Gazette 6591-11), introduced in July 2009; 3) Decriminalizing the interruption of a pregnancy on medical grounds (Official Gazette 7373-07), introduced in December 2010.

²⁶ Inter-American Court of Human Rights. The case of Almonacid Arellano et al. vs. Chile. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Sentence passed on 26 September 2006. Par. 124 et seq.

²⁷ Regarding this obligation, in July 2013 the Supreme Court handed down a sentence of imprisonment to the person responsible for the murder, as well as for having triggered this case, and has therefore upheld the judgement passed by the international body. Supreme Court. Judgement from the repetition of hearing Roll No. 1260-13, 29 July 2013. Thereby upholding the judgement passed by Rancagua Court of Appeal, Roll 2242-2011, 18 August 2011.

²⁸ Inter-American Court of Human Rights Resolution, 18 November 2010, the case of Almonacid Arellano vs. Chile. Monitoring Compliance with Judgement.

173 officials convicted of long-term sentences for these crimes were never imprisoned²⁹, and that only 67 officials are currently serving prison sentences. Of these, 15 have received some kind of benefit³⁰, which although is not generally objected to for persons deprived of their liberty, within this context it represents a form of impunity.

22. Superior courts have taken important steps over the last few years in establishing criminal responsibility for war crimes and crimes against humanity, and have legally framed these criminal acts as renounceable in relation to international humanitarian and human rights law. However, Chile still fails to recognize the right to legal reparation, and in general, jurisprudence in this area has been contradictory. Given that different verdicts have been handed down regarding the prescriptibility of civil action, in June 2012, for the first time, background relating to the prescription of the civil compensation lawsuit was submitted before a plenary session in the Supreme Court, in order to standardize jurisprudence³¹. Once the prosecution had been completed, the compensation lawsuit of the families was rejected and declared prescribed³².

23. In its report, Chile highlights two initiatives relating to large-scale, systematic and institutionalized violations: The Human Rights Programme of the Ministry of the Interior and the Presidential Evaluation Commission for the Description of Disappeared Detainees and Victims of Political Murder, Imprisonment and Torture (also known as the Valech Commission). Specifically relating to the Human Rights Programme, new powers granted by Law 20.405 include the ability to undertake all legal actions deemed necessary, including filing complaints regarding the crimes of kidnapping or forced disappearance, where relevant, and of murder or summary execution. As a result of its new powers, up to September 2011 the Programme had filed 258 new complaints on behalf of 383 victims. It remains necessary to strengthen the Programme, as well as guarantee its institutionalization, funding and staffing in order for it to adequately fulfil its mandate and to constitute a proper legal and social accompaniment to the families of the victims. Similarly, the INDH has warned that, due to the need for obtaining the Undersecretary of the Interior's signature for filing complaints, the Programme has not been able to progress with the expected promptness in providing comprehensive legal assistance to victims of forced disappearance and summary or extrajudicial execution. The Valech Commission's purpose was to document cases of human rights violations during the dictatorship between 1973 and 1990. After 18 months, the Commission completed its work in August 2011. Its report included a total of 9,800 victims of political imprisonment and torture and 30 victims of forced disappearance and political execution. The Commission is valued for representing a further step towards the process of comprehensive reparations, to which the State of Chile has committed itself.

24. Since 2010, inconsistencies have been detected in the process of documenting public officials exonerated on political grounds, resulting in legal and supervisory investigations being instigated by the Legislature³³. On 8 September 2011, the Undersecretary of the Interior produced

²⁹ United Nations Human Rights Council. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances A/HRC/22/45/Add.1, 29 January 2013, par. 27

³⁰ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, pages 283 and 284.

³¹ The result of the well-known kidnapping of Dr Eduardo Alberto Gonzalez Galeno. Supreme Court Roll No. 10.665-11. 25 July 2012. The same decision was reached by the Criminal Court following the well-known murder of Luis Pantaleon Pincheira Llanos and others, Supreme Court Roll No. 3841-12.

³² Supreme Court Roll No. 10.665-2011. 21 January 2013.

³³ In the months of August and September 2011, the INDH officially informed the Office of Politically Exonerated Persons to provide information on the process of documenting and, specifically, the existence of research studies or reports into the processes and/or complaints of fraud. The Office informed that it has "no official studies or reports available on the

information on 126 cases in order to rescind resolutions of exoneration. In addition, an investigative commission was set up by the Chamber of Deputies to look into the background for the purpose of determining any politicians involved in this case. The results of the investigation are still pending³⁴.

25. Regarding the publication of the findings of the Truth and Reconciliation Commission, and the National Commission on Political Imprisonment and Torture (CNPPT), to date there is no information relating to the secret character of the documents, witness testaments and background given to the Valech Commission; documents that, as noted in Chile's Report, shall remain classified for 50 years.

26. In implementing the amendments introduced by Law 28.556 regarding automatic electoral registration and voluntary voting, the names of disappeared detainees were unexpectedly added to the electoral roll. This was an example of the lack of full institutional recognition for the legal standing of individual victims of forced disappearance. The Executive branch, in the context of compiling the electoral roll, promised to introduce a bill to remove victims from the register, despite the existence of a widespread parliamentary consensus to the contrary. This consensus prompted the Executive branch to subsequently introduce a new bill that makes no reference to the victims of forced disappearance. This implies that the Executive branch disregarded the proposals, unanimously endorsed by the Senate, in terms of introducing a bill to establish a special Roll and Statute for the victims of forced disappearance. The INDH reiterates that this practice is consistent with the State's obligation to clarify the fate of these individuals and, for as long as their status remains a legal uncertainty, it must adopt the norms of domestic law to safeguard the legal status of the absent persons, and thus guarantee their rights and those of their relatives.

Article 7. Prohibition of torture, cruel, inhumane or degrading treatment

27. **National Preventative Mechanism Against Torture (MNPT).** The State's obligation to implement the MNPT in line with the Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ("the Protocol") remains pending. In its Report, Chile stated that the MNPT would be based within the INDH. Explicit recognition of the Mechanism's proposed powers in accordance with the standards set out under the Protocol is an absolute necessity for the INDH. In addition, adequate resources and infrastructure are required for this national preventative mechanism to be able to fulfil its role efficiently³⁵.

28. **Access to justice for prisoners.** While the Prisons Ruling sets out administrative mechanisms for persons deprived of their liberty to lodge complaints relating to ill-treatment, in reality these do not function without serious problems. The main administrative inconveniences relate to insufficient guarantees of due process, such as assistance provided by an impartial and professional legal defence to understand and judge the case effectively, or a lack of information available to the prisoner as to why they are being judged and on what grounds they are charged. Additional concerns relate to complaints of ill-treatment or torture. Although relevant

topic", and indicated that the only actions underway in this regard were: the filing of a complaint on 13 August 2010 by the Ministry of the Interior for crimes of falsifying public instruments and abuse of power, among others; and the sending of a document to the State Defence Council requesting a motion to set aside judgement of public law in order to rescind resolutions of exoneration issued illegally.

³⁴ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 262.

³⁵ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 89.

administrative, as well as legal procedures exist in this area, obstacles remain in terms of their application and effectiveness. Regarding the legal route, either a lawyer is required to file and process the complaint, or the assistance of the Public Prosecutor's Office must be sought. In practice, the latter, is a complex process for a prisoner, unless they have a support network outside prison or the Public Prosecutor's Office officially decides to take up their case.

29. One of the most severe consequences in this area is the arbitrary application of solitary confinement, which constitutes cruel and inhumane treatment. Official figures submitted to the INDH by the Prison Service show that this punishment is used excessively.

Number of prison complaints between January and August 2012

Type of complaint	Number of complaints	Percentage
Verbal warning	27	0.11
Negative warning (prohibition of something)	277	1.16
Limitation of visitors	68	0.28
Suspension of recreational activities	73	0.3
Suspension of exit permission	13	0.05
Suspension of visitors	4,550	19.2
Solitary confinement	18,672	78.9

Source: Chilean Prison Service. Document No. 0569, 24 September 2012, submitted in response to INDH request.

30. The INDH has stated in its annual report that solitary confinement “constitutes the excessive use of a measure which is extremely severe in both restricting the individual prisoner’s freedom, as well as affecting their physical and psychological integrity”³⁶. The INDH has also noted, in a study specifically related to the topic, that “in the majority of public establishments, the individual in confinement has no access to bathroom services and is not permitted to leave confinement in order to go to the bathroom, having to do so in bottles and bags, which remain in the cell with them until they are released. Nor do they have access to drinking water: the water was provided in bottles and, in numerous cases, during the entire nocturnal period of confinement they had no more water than that provided during the day to quench their thirst and with which to flush the squat toilet. In a number of prisons, no hygiene products or toilet paper were permitted inside, and as a result the prisoners were filthy during the entirety of their confinement”³⁷. As such, article 86 of the current Prisons Ruling states that, “All inmates subject to this disciplinary measure shall receive no goods, except healthcare and hygiene products, which pose no risk to their security or wellbeing, and medicine authorized by the prison doctor”. In practice, however, such measures are not respected. According to research compiled by the Human Rights Centre of the *Universidad de Chile*, “the use of solitary confinement as a means of punishment is a prevailing practice, commonly used, and one which affects a large section of the prison population (almost 32% in 2011)”³⁸.

³⁶ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 24.

³⁷ INDH, Investigation into prison conditions based on the prison visits plan, April 2013, page 44.

³⁸ Nash, Claudio, Prisoners and disciplinary measures in Chile: Analysis and proposals from a human rights perspective, Human Rights Centre, Universidad de Chile, 2013, page 92.

31. The INDH highlights the creation of the Human Rights Unit of the Prison Service, the agreement signed between the latter (a subsidiary of the Ministry of Justice) and the INDH, and Resolution 4248 adopted by the Prison Service for the gradual elimination of solitary confinement from the prison system in Chile.

Response to Paragraph No. 10 of the Concluding Observations:

32. **Police Violence.** In terms of cruel, inhumane or degrading treatment, current complaints of police violence exist in the context of social protest movements staged by different groups with diverse demands right across society, such as the Mapuche or students, in numerous regions of the country.

33. These movements have noted police acts affecting the physical and psychological integrity of participating protesters. During 2011, after having monitored four protests in Santiago, the INDH concluded that police behaviour included inappropriate acts and unjustifiable violence, contrary to existing legislation, and failed to distinguish between individuals peacefully exercising their right to assembly and free expression and those acting violently³⁹. Likewise, the INDH has noted complaints of violence against women and teenagers by police officers in numerous precincts, in which the former have been forced to strip naked⁴⁰.

34. Cruel, inhumane or degrading treatment has also taken place inside police detention buses, in which investigations prove difficult to conduct and where there is no registration of detained individuals; a practice which is later undertaken upon arrival at police stations. In this sense, and despite the Chilean police force's initial negative stance, the authorization by the Office of the Comptroller General (CGR) of INDH staff to board police buses to check the health and safety of detainees has been a positive step forward⁴¹. Similarly, the police have begun installing video cameras in detention buses, which constitutes a measure of guarantee and transparency on behalf of the Institution⁴². However, the use of these cameras has been limited, it remains pending in the regions, and its use has yet to be rolled out in a coordinated manner.

35. Similarly, the INDH has noted that in certain cases, detentions are used as a way of illegitimately limiting the right to protest. Between 2009 and July 2011, the Public Prosecutor's Office received 35,203 charges of public disorder, of which 49.1% (17,293 charges) were heard by the Public Prosecutor, 14.1% (4,966) were deemed unworthy of investigation, 2.4% (846) were

³⁹ INDH, Report on the Monitoring and Registration of Police Abuse, 2011.

⁴⁰ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 27.

⁴¹ Specifically, the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR) determined that "it is deemed legally appropriate for the INDH to delegate officials in accordance with the aforementioned 4th article, second paragraph, who are permitted to enter any limited space, which falls under the responsibility of public officials, that constitutes an area for the purposes of detainment in order to obtain information necessary so as to comply with the powers of the aforementioned institution, a legal situation which corresponds to police vehicles". Office of the Comptroller General. Judgement No. 058070 on access of National Human Rights Institute personnel to police vehicles. 21 September 2012, page 4. The CGR passed its judgement in response to a request for revision by a group of members of parliament, stating that "Having considered all the information, the Comptroller General has reached the conclusion that there is no need to amend the content of Judgement No. 58.070, 2012, and rejects the request submitted by members of parliament, ratifying all parts of said pronouncement." Office of the Comptroller General. Document No. 32675 on access of National Human Rights Institute personnel to police vehicles. 28 May 2013, page 4.

⁴² INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 24.

dismissed with prejudice, and 23.2% (8,191) led to convictions. The majority of the charges did not even proceed to court due to insufficient information, no crime having been committed or because the actions involved did not constitute a serious threat to the public interest. As such, criminal pursuit through preventive, random and arbitrary detention represents an illegitimate way of controlling protests. The INDH has emphasized that the right to protest must be exercised using peaceful means and, accordingly, has condemned the violence caused by certain elements within the demonstrations.

36. An unfortunate case of violence in the context of the protests was the murder of the 16 year old adolescent, Manuel Gutierrez. According to available information, Manuel was watching the demonstration with his brother, when police officers began firing from their vehicle, hitting the teenager with one of the bullets. After having been driven to a health centre, Manuel later died. To begin with, police denied their participation in the proceedings and refused to investigate. Subsequently, they admitted the bullet was fired by a police officer, who was discharged from the police force. The case is currently being heard by military courts. Another unfortunate case is that of Angelo Estrada, who was left paraplegic after being hit by a bullet fired into the air by Prison Service officer attempting to clear a group of protesters surrounding a prisoner transportation vehicle.

37. Regarding the Mapuche, the INDH has gathered a series of witness testimony relating to police behaviour in the relevant communities, documenting the frequent use of disproportionate force and contravening the police's obligations to respect and protect human rights⁴³. Police behaviour⁴⁴ has also been criticised by the Judiciary, which has noted that, "police incursions and operations in the Community of Temucuicui constitute cases well-known to the public that, although formally legitimate in terms of their compliance with the requirements set out in the Criminal Procedure Code, give rise to their legitimate questioning on behalf of this Court regarding such incursions, and the validity of the measures used to carry them out. They also place the police in permanent risk of violating not only article 19 No. 7 of the Constitution, but also the obligations contained within ILO Convention 169"⁴⁵.

38. Violent acts also occurred in the first fortnight of February 2012 as part of the conflict in the Aysen Region of southern Chile. This Region was characterized by significant social protest movements, in which the INDH complained about the irregular and disproportionate use of riot control firearms. Such acts were responsible for a number of different injuries to numerous people, and evidence was provided of the weapons being fired directly at people's bodies and from very short distances⁴⁶. Unfortunately, in this case the Judiciary failed to control the proportionality of the police's use of force⁴⁷. In northern Chile, in the district of Freirina, there were complaints of police violence against inhabitants, who were demanding their right to health and a contamination-free environment. An INDH mission noted "an irregular and disproportionate use of riot control firearms, causing serious injuries to at least one protester", as well as "an

⁴³ INDH, Observer Mission Report to the Araucania Region: 17 to 20 January 2012, page 9.

⁴⁴ The Judiciary has also acknowledged situations of abuse, often affecting indigenous children, involving officers of the Investigations Police of Chile. Temuco Court of Appeal. Roll 435 -2013. Judgement from 6 July 2013.

⁴⁵ Temuco Court of Appeal. Roll 1136-2011. Judgement from 21 December 2011. Hearing number 5. The judgement was later upheld by the Supreme Court, Roll 35-12, 5 January 2012.

⁴⁶ INDH, Observer Mission Report to the Aysen Region: 22 to 25 February 2012, page 21.

⁴⁷ Supreme Court Roll 4143 2012, July 2012.

indiscriminate use of teargas and other persuasion techniques by the police, in contravention of the protocols regulating the police force's use of such dissuasive instruments"⁴⁸.

39. In this context, the police force's creation of a Human Rights Department is a valuable step. Such a measure must, however, be accompanied with strengthening the institution's culture of self-control, which inhibits the generalization of violent police practice, particularly by the Special Forces. Similarly, and regarding the specific cases that are known of, the accountability procedures show how brief the internal review process for determining responsibility are⁴⁹. The international human rights treaties ratified by Chile establish the State's obligation to investigate and punish those responsible for any violation of such rights. In this sense, the Chilean police force, as a State entity, and one whose mandate is based on a monopoly of the use of force, should investigate and punish officers responsible for committing violent acts against the general public. This also serves as a way of ensuring such practices are not repeated in the future.

Response to Paragraph No. 12 of the Concluding Observations:

40. **Military Justice.** The INDH values the enactment of Law 20.477 limiting the powers of military courts, but considers that the amendment to the law was partial and insufficient and does not represent compliance on behalf of the State concerning its obligations. The INDH considers the scope of the reforms undertaken to be restrictive, as the Military Justice Code maintains in force its existing definition of a criminal offence in which the assailant or defendant is a member of the armed forces (including members of the police force) and the victim may or may not be civilian. It is absolutely necessary for reforms to be introduced in line with the judgement handed down by the Inter-American Court of Human Rights in the Palamara Iribarne vs. Chile case, as well as the recommendations stemming from treaty bodies and the State's own commitments in this area.

Article 8. Prohibition of Slavery, Trafficking, Servitude and Forced Labour

41. **People trafficking.** The INDH highlights the enactment of Law 20.507, determining the crimes of illegal migrant smuggling and people trafficking and establishing measures for its prevention and a more effective criminal prosecution. The legislation ensures necessary reforms are forthcoming that broaden the crime beyond mere sexual exploitation, adding to this the crimes of forced labour or services, servitude or slavery and the removal of organs. Nonetheless, there are a series of legislative gaps and practices that impede the eradication of trafficking in the country. Among the most important is the need for this Law to consider the internal trafficking of people, especially as research shows this practice to be the most common form of trafficking in Chile.

42. Likewise, the INDH has revealed there to be a lack of information available in this area. This could be rectified by introducing a register to monitor the number of cases, the sex of persons affected, and the nationality or age of victims, among other variables. Furthermore, there is a lack of training in this field within the Judiciary and certain other institutions, including the police, which lack protocols, information or guidelines that enable the detection of situations of people trafficking and smuggling. The INDH emphasizes as a positive step the reactivation of the Cross-sector Working Group on People Trafficking, composed of a group of Ministries and State services directly related to the field, including the INDH.

⁴⁸ INDH, Observer Mission Report to Freirina: 31 May and 1 June 2012, page 35.

⁴⁹ INDH, Observer Mission Report to the Araucania Region: 17 to 20 January 2012, page 9.

Article 9. Prohibition of arbitrary detention or imprisonment

43. **Preventive detention.** The INDH considers as a matter of concern the situation of persons deprived of their liberty in cases of preventive detention. Preventive detention is a problematic legal concept in a democratic society, because it affects the presumption of innocence and, as such, its use must be restricted. However, only 23% of people held in preventive detention between 2005 and 2010 were eventually sentenced to imprisonment⁵⁰. The disproportionate use of preventive detention has been highlighted by the Legal Aid Office over the last few years, especially in cases in which the defendant has been held in preventive detention despite having been acquitted on the crime⁵¹. Furthermore, there is no judicial or administrative recourse available to people subject to inappropriate preventive detention⁵².

Article 10. Humane and dignified treatment for persons deprived of their liberty

44. Chile has a serious problem of prison overcrowding, most dramatically exemplified in December 2010 when 81 inmates were killed by a fire in the San Miguel Preventive Detention Centre. At the time of the blaze, the detention centre housed 1,875 inmates. It was built for 632, which represents an over-population rate of 197%.

45. In September 2012, the prison population was 51,651, but maximum capacity was only 41,034 places, representing an over-population rate of 25%. While overcrowding has decreased, mainly due to the enactment of Law 20,588 on general reprieve, having fallen by 1,732 inmates in 2011, high levels of prison overcrowding still persist. This, in conjunction with a general perception of insecurity among the Chilean population, encourages the use of incarceration as a central element of the criminal justice policy⁵³. Chile also has a high rate of imprisonment, with 297.9 prisoners per 100,000 inhabitants, one of the highest rankings in this regard in Latin America. Such overcrowding has repercussions on prisoner living conditions, which have been deemed by the Inter-American Commission on Human Rights, as well as the Supreme Court judge Monica Maldonado, as degrading, extremely unhealthy and deficient in terms of drinking water, food and hygiene⁵⁴.

46. The INDH values the prison system reform set in motion by the State, and highlights the adoption of short and long term measures to improve the country's prison conditions. However, there is a trend of abusing the use of prison as a form of punishment, which decreases the benefits

⁵⁰ To this should be added the figures previously submitted regarding the high number of illegal detentions declared by the courts, in the context of social protest movements.

⁵¹ See Legal Aid Office, Statistical Report 2007, page 31 and Annual Report 2008, page 47. Similarly, see Duce, Mauricio and Riego, Cristian, Preventive prison in Chile: Analysis of the legal changes and their impact, Universidad Diego Portales Publications, 2011, page 165. In this area, the Legal Aid Office launched the "Innocents Project", which arose in response to the problems being faced by defendants, having been subjects of legal pursuit and accusation of a crime for which they were later found innocent.

⁵² On 1 September 2013 the State announced amendments to the "Reform to the Criminal Procedure Reform" Bill, Official Gazette No. 8810-07. Among the measures announced were: the broadening of criteria and powers for the guarantee judges in determining the preventive detention of defendants. This runs contrary to the initial objective of the Criminal Procedure Reform, which held that preventive detention was only to be used in exceptional circumstances.

⁵³ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 143.

⁵⁴ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 87.

of incarceration and leads to an increase in the prison population⁵⁵. Imprisonment should be rationalized, the Prison Service reformed and sentencing courts created; changes that have not been comprehensively raised by authorities as part of the public debate. In this sense, the passage of Law 20.603 should be noted, as it establishes alternative measures to imprisonment and gives the courts additional tools to avoid using prison as a tool of punishment. It is now necessary for the Executive branch to enact the respective regulation, without which the Law will not enter into force.

Article 12. Freedom of movement

47. Migrants. Chile has neither official statistics to gauge the number of immigrants in an “irregular situation”, nor a breakdown of variables on the ethnic and racial origin of immigrants in general. Such measures are indispensable for devising adequate public policy and programmes aimed at the immigrant community. The country also lacks a single and clear legal body for dealing with immigrants. Current legislation (Decree Law 1.094 from 1975) does not account for the new migratory trends and displays important deficits in relation to human rights standards. This is a complex matter given the continued increase in numbers of foreigners arriving to Chile, particularly citizens from other countries in the region⁵⁶. The INDH expects parliamentary debate to incorporate human rights standards within the Bill⁵⁷, including the respect for migrant diversity and cultural expression, in addition to distinctions of migratory status (visa types) which do not constitute arbitrary discriminations. It is also important for this debate to be heard by immigrant and civil society organizations committed to recognizing and guaranteeing the human rights of the immigrant community.

48. In this context, Chile’s assurance that all children and teenagers, irrespective of their parents’ migratory status, have access to kindergarten, primary and secondary school is a step forward in the field of education. Similarly, in terms of health, existing norms ensure that immigrants in irregular situations have access to urgent medical attention, and that all pregnant immigrants, including children and teenagers, irrespective of migratory status, have access to healthcare. Nonetheless, in practice the INDH has noted that access to healthcare in hospitals is dependent on payment, and that in the case of education, young immigrants, for example, have no access to State credit provided to assist students with their university studies.

Article 13. Situation of foreigners in accordance with the Covenant

49. Immigrants and access to justice. The INDH considers that the period of 24 hours for submitting a complaint, in the case of a foreigner expelled from the country, to be extremely short. Furthermore, the corresponding norm grants discretionary powers to authorities at the moment of taking the decision to expel the foreigner. Access to effective legal counsel is a fundamental right, and this is especially salient in the case of the immigrant community given that immigrants are particularly vulnerable when in irregular situations and given that they are individuals who frequently lack access to sufficient information. The extradition process of a foreigner deprived of their liberty is also preoccupying. The situation is defined by Law 20.588 covering general reprieve, and it prohibits their re-entry to the country for ten years.

⁵⁵ Recommendations for a New Prison Policy, Prison Reform Council, March 2010, page 23.

⁵⁶ In 1982 the foreign population was 85,000; in 1992, 105,000; in 2002, 185,000. The figure reached 352,344 in 2010.

⁵⁷ Via Message No. 089-361, in June 2013 a bill was introduced seeking to comprehensively regulate immigration.

50. Also of concern to the INDH is the detention of some immigrants while the situation of their migratory status is resolved, often undertaken in contravention to domestic legislation. For example, the INDH has documented the case of a Colombian woman illegally detained for almost two months by the Investigation Police in Arica, as well as a group of immigrants in a similar situation in Santiago. In both cases the Supreme Court ruled the detention illegal and ordered the detainees to be released. In the case of the Colombian woman, the petition was filed by the INDH⁵⁸.

Article 14. Procedural guarantees

51. The State has devised public policies and forms of institutionalization in order to address the situation of the social and political exclusion of indigenous peoples. However, in practice these have yielded mixed results.⁵⁹ The INDH has maintained that the relationship between the State and indigenous peoples cannot be conceived of without the former taking responsibility for the dispossession and usurpation suffered by the latter, not only in terms of their land, territory and natural resources, but also of the subjugation of political and cultural identity caused by discrimination and the historical denial of rights to which they have been subject.⁶⁰ The unmet demand of indigenous peoples for political and territorial rights has generated a climate of tension and acts of violence affecting members of indigenous communities, as well as small-scale farmers, business owners and other residents of the disputed areas.⁶¹

52. **Law 18.314 determining and punishing terrorist behaviour.** This law, which represents one of the most intense punitive measures in Chilean legislation, has been subject to amendment during the reporting period⁶² in order to bring it in line with international standards. The law's definition of a terrorist crime violates the principles of legality and criminality, and establishes exceptional norms that contravene the legal standards of due process⁶³.

53. In addition to these normative problems, its widespread use against some of society's most discriminated-against groups, especially the Mapuche community, is of particular concern to the INDH. According to statistics from the Public Prosecutor's Office, between 2010 and 2011, 48 people were tried under the anti-terror law, of which 32 were affiliated to, or members of the Mapuche community⁶⁴.

54. The most recent case regarding the application of Law 18.314 is the so-called "*caso bombas*" ("bombs case"). Numerous explosions taking place across Chile's Metropolitan Region (in which the capital city of Santiago is located) were classified as terrorist attacks by the Public Prosecutor's Office. On the morning of Saturday 14 August 2010, authorities initiated "Operation Salamandra",

⁵⁸ Supreme Court Roll 1346-13, judgement from 1 April 2013.

⁵⁹ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 61.

⁶⁰ INDH, 2010 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 97.

⁶¹ Numerous cases of arson against land and countryside, machinery and other goods. In January 2013 a house was set on fire, causing the death of an elderly couple, Bernard Luchsinger and his wife Vivianne McKay, which led to widespread public condemnation.

⁶² The last two amendments relate to Law 20.467, 8 October 2010 and Law 20.519, 26 June 2011.

⁶³ INDH, 2011 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, pages 111-112.

⁶⁴ An illustrative case of the problems inherent with the Anti-terrorist Law and its interpretation and application is what occurred in the case filed against 17 members of the Mapuche community in Cañete. Cañete Criminal Court, Charge RUC 0800932994-4.

in which 14 people were arrested in Santiago and Valparaiso, accused of terrorist conspiracy and placement of explosive artefacts of a terrorist nature. The majority of the individuals were placed in preventive detention for an average of eight months, and held in the Special Maximum Security Unit (U.E.A.S.) of Santiago's Maximum Security Prison, under conditions of confinement and rigorous isolation for 22 hours a day.

55. The INDH has questioned the application of the aforementioned legislation on the grounds that it affects the guarantees of due process which, during the trial was reflected in "the use of information to prove the defendants as having terrorist personalities, rather than proving their role in the charges brought against them"⁶⁵. Santiago's Third Criminal Court unanimously rejected the charges against the six people accused: placement of explosive artefacts of a terrorist nature and the financing of a terrorist conspiracy. The judgement also ruled that the investigation of the Public Prosecutor's Office was incomplete and undertaken in a prejudiced manner.

Article 19. Freedom of opinion and expression

56. **Access to information.** The INDH values the enactment of Law 20.085 on transparency and access to information, because it is a piece of legislation establishing specific obligations for the State, while creating an institution, the Transparency Council, to oversee the law's compliance.

57. **Communications media.** There is a highly concentrated ownership of the written and radio media in Chile. This affects the pluralism of information available and, therefore, the right to the freedom of expression across the two platforms. Within the printed press, there are two conglomerates that produce the majority of the newspapers currently available in national and regional circulation⁶⁶. International standards in this field⁶⁷ establish that the existence of autonomous and pluralistic communications media is a fundamental aspect of a democracy, contributing to public debate, informing society and being free to scrutinize the authorities.⁶⁸ The INDH has indicated that the State should commence actions facilitating the opening up of the information market to voices different from those in which media power is currently concentrated.

58. The media is able to construct realities from which it can determine facts and events it deems deserving of public attention, as well as the perspective from which these are presented. Through the messages emitted, the communications media plays a dominant role in building or reinforcing stereotypes of vulnerable groups. There is particular concern for the way in which the news portrays vulnerable groups, shaping or strengthening social prejudices and, in such cases, contributing to discriminatory treatment⁶⁹. On this matter, the INDH has formally complained to the National Television Council during this report's period of scope. The formal complaint documents outline the specific cases in full detail⁷⁰.

⁶⁵ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 30.

⁶⁶ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 323.

⁶⁷ Inter-American Commission on Human Rights, Special Rapporteur for Freedom of Expression, A Hemispheric Agenda for the Defense of Freedom of Expression, 2010, pages 33 – 36.

⁶⁸ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 321.

⁶⁹ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 326.

⁷⁰ Document No. 312, Making known the views of the INDH regarding the relevant television coverage of 28 August 2012; Document No. 311, Making known the views of the INDH regarding the relevant television coverage of 28 August; Document No. 168, submitting complaint in line with Law 18.383, 23 May 2013.

59. In relation to media and its links to human rights, it should be noted that the lack of the aforementioned should constitute a violation of the right of every person not to be subject to attacks on their honour (art. 19, no. 5 of the Constitution and art. 17 of the Covenant), and of the presumption of innocence of the defendant until proven guilty (art. 4 of the Criminal Procedure Code and art. 14.2 of the Covenant). The latter point is relevant in terms of the public display of the defendant's image by the mass media at the moment of arrest and prior to the commencement of legal procedures. This is especially serious in regard to art. 10.1 of the Covenant, which stipulates: "All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person", as well as article 150 of the Criminal Procedure Code, which, in reference to preventive detention, in its third paragraph states: "The defendant shall be treated as innocent at all times". The act of transporting defendants while handcuffed in public spaces, including within court, before the mass media (a frequent practice in Chile) is inconsistent with this right.

60. Community radios are regulated by Law 20.433, which establishes a maximum period of coverage and prohibition for transmitting commercial advertising. This not only makes their function and survival more difficult, but also affects their right to free expression, as well as the general public's right to access a pluralism of information.

Article 21. Right to peaceful assembly

61. **Social protests.** The INDH has identified numerous obstacles to exercising the right to assembly. On one hand, the Constitution recognizes the right to peaceful, and unarmed, assembly without prior permission (article 19 No. 13), but stipulates that its exercise in public places is at "the general discretion of police". In practice, this means that the regulation of the right to assembly has been established by Supreme Decree (D.S.) 1.086 from 1986, which infringes on the legal principle guaranteed by international treaties and the Constitution⁷¹.

62. The right to protest may affect public order and, in particular, the rights of others. It is the task of the authorities and public security forces to maintain public order while upholding the rights of all persons. However, and despite the police violence documented by the INDH, it has been confirmed that those groups committing crimes in the context of public demonstrations are infrequently arrested. In the majority of cases, police arrest protesters demonstrating peacefully, as confirmed by information corroborated by the Legal Aid Office relating to illegal detentions⁷². On this matter, the INDH has repeatedly reproached the lack of police effectiveness in detaining those responsible for committing crimes in the context of public demonstrations, and it remains an issue that has not, as yet, improved.

63. A topic that has helped to focus the debate is the discussion of the Bill "strengthening the safeguarding of public order" (Message No. 196-359).⁷³ The Bill was introduced by the Executive branch in September 2011 in response to "the looting and damage caused to public and private

⁷¹ Resolution on "Public demonstrations and social protests: considerations from a human right perspective", approved by the Council of the National Institute of Human Rights, 27 August 2012 – Session 111.

⁷² In the 2012 Annual Statistics Report, the Legal Aid Office stated the number of declared illegal detentions had risen over the last few years. Effectively, in 2008 there were 969 declared detentions; in 2009 the figure was 1000; in 2010, 1207; in 2011, 2134; and in 2012, 2892.

⁷³ Resolution on the Bill "strengthening the safeguarding of public order", approved by the Council of the National Institute of Human Rights, 20 May 2013 – Session 154.

property taking place in the context of certain protests”, and which places persons taking part in spontaneous demonstrations at risk of facing up to three years imprisonment. The Bill also creates a new offence and a new rule for determining sentencing regarding cases in which the person responsible for committing the crime or offence has done so while covering their face in order to hide their identity (known as “*encapuchados*”, literally “the hooded ones”). This establishes a link between people who could be identified as “hooded” and public disorder and the destruction of property. The lack of distinction between people protesting peacefully and people committing criminal acts, as well as the use of disproportionate force, could constitute a set of practices that obstruct the right to peaceful assembly, thereby violating human rights standards concerning the right to assembly and freedom of expression. This matter has been raised by the United Nations Special Rapporteurs on the Rights to Freedom of Expression, Assembly and Association, and Human Rights Defenders⁷⁴.

Article 22. Right to association

64. Law of participation. The INDH has noted that “the State, for different reasons in each case, has failed in general to incorporate into its operations, the voices of social and civil society organizations, as well as indigenous peoples, which has generated ongoing demands and a growing distance between public institutions and authorities. Therefore, one of the State’s challenges is to come up with an adequate response to the biggest and most widespread demands from citizen participation”⁷⁵. Accordingly, regarding the implementation of Law 20.500 to which the State refers, the Chilean Association of Non-Governmental Organizations (ACCION) has stated that, “the rules have not been resolved and the law cannot be fully exercised (which also) fails to comply with the expectations of an organized civil society to strengthen real spaces for participation and political advocacy (as well as not) being up to standard in terms of our country’s needs in the area of democracy and development”⁷⁶.

Response to Paragraph No. 14 of the Concluding Observations:

65. There is a declining trend in the level of trade unionism in Chile, which is a preoccupying situation given that unions constitute a form of labour rights protection. In addition to this pattern there are further complications, like anti-trade union practices by businesses. Among the most condemned practices are: (i) Infraction of article 289 of the Labour Code, which refers to practices such as granting special benefits to disincentivize the formation of trade unions, the purpose of which is to avoid a situation whereby a worker joins an existing trade union, or acts of trade union interference, among others; (ii) impeding the formation or function of a trade union (threats of dismissal or loss of benefits); (iii) unpaid trade union dues; (iv) unpaid trade union leave (v) failing to grant pre-agreed work to a trade union member; (vi) illegal dismissal of a trade union member worker; (vii) complaints made in relation to illegal replacements and reinstatements of striking

⁷⁴ The bill underwent general discussion in the Chamber of Deputies on 6 August 2013. It was approved to, in general and in particular, and sent back to the Senate to continue its passage through Congress. While it rejected the points of concern raised, the Government expressed its displeasure at the Chamber of Deputies’ decision, announcing that it would introduce new indicators aimed at reincorporating these points to the Senate.

⁷⁵ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 105.

⁷⁶ ACCION, Law of Participation: A Law without Rules, 2012, par. 15.

workers. The data indicate that the higher the level of trade unionism, the fewer the complaints filed to the Directorate of Labour⁷⁷.

66. Regarding the right to strike, this must be understood of in relation to trade unionism and collective bargaining, as it constitutes the principal means of negotiation for workers in relation to their employers. In particular, it relates to the possibility of employers replacing workers (art. 381 of the Labour Code), and the date on which the strike has to start, which is set as three days after workers vote in its favour (art. 374 of the Labour Code). These examples best exemplify the difficulties relating to the right to strike in Chile. In terms of appointing replacements, this represents a tool depriving workers of negotiating power, given that striking is a collective expression, the force of which is justly based on the possibility of affecting production. The regulatory obstacles to exercising the right to strike in Chile have been the object of criticism by international human rights bodies. For example, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) has encouraged the Chilean State to specifically review “section 381 of the Labour Code, which provides for the possibility of the replacement of striking workers”⁷⁸, as well as the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), which has stated, “The Committee notes that section 381 of the Labour Code contains a general prohibition on the replacement of striking workers, but that there exists the possibility of their replacement subject to compliance by the employer with certain conditions in the final offer during the negotiating process”⁷⁹. Likewise, the Labour Code (CT) creates obstacles to collective bargaining, including, for example, its prohibition relating to contract or temporary workers (article 305 of the CT), a type of employment which affects one fifth of Chile’s working population. Similarly, the CT rules that it is not only trade unions that are able to negotiate, but also worker organizations which are convened especially to do so⁸⁰.

Article 23. Protection of the family

67. **Judgement of Karen Atala case.** The INDH highlights the judgement passed by the Inter-American Court of Human Rights against the Chilean State in the “Atala Riffo and daughters” case, which expressly stated there to be more than simply one concept of what constitutes a family. Specifically, the Court noted that, “with regard to the concept of family, various human rights organs created by treaties have stated that there is no single model for a family, which may have many variations”⁸¹. Likewise, the verdict establishes obligations for the State, as reparatory measures, including the training of public officials on human rights, sexual orientation and non-discrimination. The INDH believes this to be a fundamental step towards guaranteeing that no similar situations arise in the future of discrimination on the grounds of sexual orientation.

68. **Amparo judgement against expulsion decree in order to protect the family.** The INDH highlights the Supreme Court’s verdict to accept a writ a amparo filed in favour of a Peruvian citizen and her two children (both minors), which annulled the expulsion decree that revoked the

⁷⁷ Directorate of Labour. Compendium of Statistical Series 1990-2011. Trade unions. From <http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-propertyvalue-22777.html>.

⁷⁸ CESCR, Concluding observations: Chile, 2004, E/C.12/1/ Add.105, 26 November 2004, paragraph 42.

⁷⁹ Direct Request to the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) – Adopted: 2003, Published 92nd ILC session (2004) Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chile (Ratification: 1999).

⁸⁰ INDH, 2011 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 145 et seq.

⁸¹ Inter-America Court of Human Rights, Atala Riffo and daughters vs. Chile case judgement, 24 February 2012, par. 172.

individual's status as a permanent resident in Chile for having provided falsified declarations in the process of applying for residency. The Supreme Court stated, "Given the personal and family circumstances of the defendant, it should be noted that they produce inevitable consequences for the other defendants protected under amparo appeal; the minors, both children of the defendant, ten and one years old respectively, with the former having evident roots in this country, currently undertaking their formal education in Chile, and an obvious attachment to the mother in the case of the latter, given the child's young age"⁸². The Supreme Court took into consideration the State's duty to provide adequate protection to, as well as fostering the strengthening of the family. It did so by signalling that these duties correspond to rights enshrined in international instruments, and which would not have been guaranteed if the expulsion decree had been enforced, given that it would have resulted in the disintegration of the nuclear family.

Article 24. Protection of childhood

69. **Violence against children.** Violence against children and adolescents has been documented in Chile, with some cases seeing a noticeable and troubling increase. There has been a sustained rise in the number of complaints of violence against children under 14 years of age in the country. The last two reports on domestic violence by UNICEF (2006 and 2012) show that severe physical abuse affects 25.9% of children, with no improvement over time, and that 70% are victims of psychological abuse. In terms of child labour, one of the worst forms of abuse against juvenile persons, reports show that the practice has increased in Chile between 2003 and 2012, reaching the figure of 219,000 (6.9%) of children and adolescents in 2012. The survey shows that 90% of the children and adolescents with jobs work in positions classified as dangerous, either by the nature of the work or the conditions in which the work is carried out. A concern for the INDH is the lack of institutionalism allowing for the design and assessment of public policy regarding children, as well as the absence of comprehensive protective legislation on the rights of children. This institutional deficit, among other issues, impedes the existence of an integrated system of information enabling effective state action to target children, and the adequate coordination and guarantees of universal access to services.

70. In terms of the criminal responsibility of adolescents, it has been widely confirmed that existing legislation (Law 20.084) has failed to both establish liability for adolescents committing criminal offences and conform to its own standard of ensuring that "the punishment is part of a broad socio-educational intervention and aimed at full social integration" (art. 20). The INDH has expressed its concern for the use of imprisonment as an immediate measure of dealing with adolescent offenders, even though the law only allows for such means in exceptional circumstances. On the other hand, there is a significant percentage of adolescents subject to preventive detention during criminal proceedings and, once the judicial phase has been completed, are placed in a halfway house. The damage caused by the deprivation of liberty can be avoided with preventive non-imprisonment measures. Generally, the promotion of alternative solutions is rare, such as reconciliation agreements between the victim and the adolescent offender through intervention processes or the conditional suspension of the sentence.

71. The INDH is concerned that the centres of the National Bureau for Minors (SENAME), in which adolescents serve imprisonment sentences, do not adhere to the minimum standards with regard to infrastructure, hygiene, access to physical and mental health treatment, suitable and trained

⁸² Supreme Court, amparo judgement, 14 September 2012, Roll No. 7018-12. Extract from third hearing.

staff, and a broad, socio-educational programme promoting the social inclusion of the adolescents, among other aspects. Likewise, it has been documented that some centres operate without the corresponding authorization from the Ministry of Health. In this regard, on 2 August 2012 a bill⁸³ was introduced to the Chamber of Deputies proposing amendments to the institutionalism of children and adolescent issues in Chile, establishing the State's commitment to respect, guarantee and protect the rights of children through modern institutions. This legal initiative seeks to abolish SENAME, and transfer its responsibilities into two independent services: The National Service for the Protection of the Child and Adolescent and the National Service for the Criminal Responsibility of Adolescents. The purpose of this initiative is to improve management of, and provide effective guarantees on the rights of children and adolescents⁸⁴.

Article 25. Political rights

72. Right to vote. ⁸⁵ In Chile, article 13⁸⁶ of the Political Constitution of the Republic of Chile (CPR) defines who a citizen is and to what rights they are entitled. The Constitution also sets out conditions for the suspension or loss of the right to vote. While the CPR and the Constitutional Law 18.700 on popular votes and vote counts establish the right to vote, the INDH has shown its concern in two specific areas concerning the right to vote for Chileans abroad and persons deprived of their liberty.

73. Regarding the vote for Chileans abroad, despite being a well-established theme in the public debate, there has been no progress in the reporting period to enable the approximately 850,000 Chileans living abroad to be able to exercise their right to suffrage. In this regard, the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, in its report to Chile, recommended it “resume the efforts undertaken in view of enabling Chilean migrants working abroad to exercise their right to vote in elections organized in the State party”⁸⁷. Recently⁸⁸, National Congress has resumed its discussions of the relevant bills⁸⁹ on this topic that have, until now, failed to make any progress in the legislative debate since 2011.

74. In terms of persons deprived of their liberty, art. 16 of the CPR establishes that the right to vote is suspended, among other reasons, for anyone found guilty of committing a felony⁹⁰ or a crime deemed by law as terrorist in nature. Similarly, art. 17 stipulates that the quality of citizenship is lost, and with it the corresponding right to vote, following conviction for a felony or

⁸³ Message No. 31-360 (Official Gazette 8487-07), that abolishes the current National Bureau for Minors, creating two new services to focus on children and adolescents. At the time of this report's composition, the bill was at the first constitutional stage of the legislative process in Congress.

⁸⁴ On 30 April 2013 the Government, through Message No. 066-361 introduced the Protection Bill on the rights of children and adolescents (Official Gazette 8911-18). The initiative, sent for examination to the Family Commission, responds to a request raised by a group of Deputies as a condition for debating the bill on the division of SENAME. In this way, the reform of the Bureau became the subject of a comprehensive discussion regarding a child-related proposal.

⁸⁵ On 19 June 2013, Law 20.678 entered into force, establishing the direct election of Regional Councillors.

⁸⁶ “Article 13.- A citizen is an individual Chilean of at least eighteen years of age and who has not been convicted of a felony. The quality of citizenship endows the right to vote, stand for positions of election by popular vote and any others conferred by the Constitution or by law”.

⁸⁷ Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Concluding Observations: Chile, 2011, CMW/C/CHL/CO/1, par. 49.

⁸⁸ August 2013.

⁸⁹ Official Gazette Nos. 7335-07 and 6950-07.

⁹⁰ Felonies include: a) All criminal offences; b) All simple offences punishable by imprisonment, detention, confinement, reprimand and exile in the first degree. Article 37 of the Penal Code.

for a crime classified by law as terrorist in nature, as well as convictions relating to the trafficking of narcotics constituting a felony. As such, in accordance with the Constitution, a person accused of a crime, whether held in preventive detention or not, or sentenced to less than three years and one day imprisonment, can, according to domestic legislation, exercise their right to vote⁹¹. However, in practice, and as a result of the recent amendment establishing automatic registration, this right is obstructed by the absence of polling stations in prison establishments. Likewise, the INDH has received complaints about the absence of polling stations in certain areas of the country, including, for example, the locality of Bajos de Mena⁹², in the southern Metropolitan Region. The State has the duty to adopt all necessary measures to ensure all people who wish and qualify to vote, are able to do so.

Article 26. Equality before the law and non-discrimination

75. In relation to article 26 of the Covenant and the right of all persons to equality before the law, the INDH has expressed its concern, principally through its annual reports, on the situation of discrimination experienced by numerous vulnerable groups which are obstructed from freely exercising their rights. These include:

76. **Persons with disabilities.** Law 20.422 was enacted in 2010 establishing rules on equal opportunities and the social inclusion of persons with disabilities. This legislation represents a solid step in recognizing the principles and standards established in international human rights law concerning persons with special requirements. Nevertheless, information compiled by the INDH in the area of health and work shows how there are still serious obstacles hindering their effective social inclusion.

77. In terms of health, the INDH has noted that State initiatives on the right to health of persons with disabilities relate primarily to medical attention concerning disease, rehabilitation and the provision of technical help. However, they leave aside relevant areas necessary for a truly comprehensive healthcare, including prevention and promotion. In terms of work, there is a shortage of employment sources for persons with disabilities, while stigma also plays a prevalent role in the working world, especially in the case of persons with mental disabilities. In addition, staff selection schemes include procedures that are both inappropriate, and that entail requirements impeding the participation of persons with disabilities. For example, the lack of verifying candidates' studies or the application of standardized testing.

78. **Older persons.** There is a series of special laws specific to the situation of older persons, principally covering the areas of health, work, welfare and social security, and violence. The INDH considers the recent elimination of the 7% compulsory contributions payment to public and private systems of healthcare for older persons in vulnerable situations to be an important step that should be noted.

⁹¹ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 145

⁹² Electoral Service Notification No. 4377 on voting locations in the district of Puente Alto. 28 May 2013, page 2. It shows that there are no polling stations in the locality and "As a future solution, it is necessary for the Municipality of Puente Alto (to conduct) a report on the demographics, infrastructure and services at the respective locality's disposal, as agreed to by this Directorate, in accordance with the corresponding assessment, the creation of an electoral constituency in Bajos de Mena, which would ensure the existence of polling stations".

79. It is important for the INDH that the State implements public policies in this field based on a human rights perspective situating older persons as subjects of rights, and not from the perspective of viewing them as recipients of government hand-outs.

80. Furthermore, there is concern surrounding a number of specific cases of abuse of older persons in certain long stay residential units. There are 664 legally authorized Long Stay Residential Units (ELEAM) in Chile, with another similar number of establishments believed to be operating illegally. As part of a pilot project, the INDH visited 14 units in order to inspect the living conditions of older persons. It was found that the quantity of carers was insufficient for attending to the diversity of needs and the complexity of certain diseases present in the Units. In addition, elderly residents were found tied-up in seven ELEAMs, in which two cases were justified by claiming the need for changes to posture and other medical reasons. It is time for the State to comply with its commitments and to create a national supervisory and assessment mechanism for public and private establishments in which older persons are resident.

81. **Sexual Diversity.** Law 20.609 establishes human rights measures for sexual diversities and prohibits discrimination on the grounds of both sexual orientation as well as gender identity. Likewise, during the period covered by this report, Notice 34 of the Ministry of Health was adopted, which established policy relating to transgender persons⁹³. Also, a bill was introduced proposing the setting up of the “Life Partner Agreement”, aiming to establish legal recognition of the right to same-sex or opposite-sex union. While such unions, in fact, are legally recognized⁹⁴, in practice the couples do not enjoy a legal status allowing them full access to the exercise of civil, economic and social rights.

82. Despite the aforementioned, sexual diversities in Chile still face legal and social discrimination. Notable cases setting the tone of aggression include the July 2011 murder in Calama of transsexual Cinthia Gonzalez Rodriguez, the brutal attack on Sandi Iturra in Valparaiso in June, and the intentional arson attack in Talca in September on four *mediaguas*, in which transsexual members of the association Transgenders for Change were living. The murder of Daniel Zamudio in a public place on the grounds of his sexual orientation should also be added to the list.

Article 27. Rights of minorities

83. The Chilean State has worked hard to implement programmes to safeguard rights enshrined within this article. However, it has been unable to make progress in terms of constitutional recognition for indigenous peoples, despite the existence of an amicable solution agreed to by the State in the 2004 Huentao Beroiza case heard by the Inter-American Commission on Human Rights. While a bill with cross-party support is sitting before National Congress, it has remained in

⁹³ The Director of the Forensic Legal Service issued a Notice of general distribution instructing compliance of the Expert Technical Guide for Forensic Sexology for cases of transsexual and intersexed persons. Standard Notice No. 1297/2012, 9 November 2012.

⁹⁴ There is no explicit recognition of such relationships in the Chilean legal system, but different norms do exist which recognize, more or less explicitly, the legal status of living in a state of cohabitation. As such, once the requirements relating to what constitutes a union are met, legal status is afforded in the following situations: upon the termination of cohabitation and when there is a need to share the assets acquired during this period; regarding the authentication of assets in order to request compensation for moral damage in case of an illegal act which causes the death of the cohabitant; in cases of violence committed against the woman recognized as one of the cohabitants; and in order to access certain social policy benefits.

the first constitutional stage of the legislative process since 2009⁹⁵, and significant discrepancies remain regarding the way in which it recognizes indigenous peoples and their rights⁹⁶. Furthermore, the bill has not been subject to the consultation process established in ILO Convention 169, to which Chile is a signatory.

84. Indigenous peoples have also been obstructed in terms of exercising political participation. Effectively, indigenous communities have no representation in National Congress, and their participation in regional government, while having increased in recent years, is still proportionally low in terms of their overall population, particularly in regions with large indigenous demographics, such as Araucanía. On the other hand, the demands set out by the law of political parties, including registration in at least three contiguous regions, and gaining almost five thousand legalized signatures and member payments, while applicable to the population as a whole, are conditions that make it very difficult for indigenous communities to form a political party and participate autonomously in the electoral process⁹⁷.

85. A second problem regards the institutionalism and effectiveness of the right to prior consultation. In Chile, consultation is regulated by Decree 124 of the Ministry of Social Development. This regulation restricts the measures and topics open to consultation, while its short deadlines prove hard to meet given the nature and magnitude of the issues being considered by the communities involved⁹⁸. The INDH has maintained that legislative and administrative measures affecting indigenous peoples must guarantee an effective implementation of the right to prior consultation and participation⁹⁹, and in 2012 the Executive branch introduced a new proposal regulating consultation. However, according to the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya,¹⁰⁰ it fails to satisfy international standards in various aspects, and requires substantial improvement¹⁰¹.

86. Regarding the Environmental Impact Assessment System (SEIA) Regulation, this mechanism plays a fundamental role given the important pressure stemming from the need for new sources of energy in Chile, as well as the interest in the exploitation of natural resources found on

⁹⁵ Official Gazette Nos. 5324-07 and 5522-07.

⁹⁶ INDH, 2012 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, pp. 62 to 66.

⁹⁷ This is the case for the Mapuche party under construction, Wallmapuwen, which has been trying for years to legalize its formation without success, having been unable to meet all the requirements established by the aforementioned law. It should be noted that following a decision by the Electoral Service, the party's statutes must remove all *mapuzugun* (the Mapuche language) terminology and concepts relating to indigenous rights; a practice which, in the opinion of the INDH, is unconstitutional. This includes the denomination "*pueblo*" (as a description of collective self-identification, meaning "community of peoples" in English), autonomy (regarding the right to self-determination) or *Wallmapu* (as a description of ancestral Mapuche territory).

⁹⁸ INDH, 2010 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 101.

⁹⁹ INDH, 2010 Annual Report: Human Rights Situation in Chile, page 165.

¹⁰⁰ Comments of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples in relation to the document entitled: "Government proposal for a new regulation on indigenous consultation and participation in accordance with articles 6 and 7 of Convention No. 169 of the International Labour Organization", Chile. November 2012. From: <http://www.politicaspUBLICAS.net/panel/re/docs/1654-comentario-reglamento-chile.html>

¹⁰¹ The INDH participated as an observer at the "Roundtable Consensus to discuss the government proposal for a new regulation on indigenous consultation and participation, in accordance with articles 6 and 7 of Convention No. 169 of the ILO", running from March to July 2013 and aiming to reach an agreement with indigenous peoples on a new regulatory text. The meeting failed to reach an agreement regarding three key aspects: concepts relating to direct involvement, measures that must be subject to consultation and the consultation basis for investment projects on indigenous lands and territories.

indigenous lands and territories¹⁰². Given that, by provision of the Environmental Law, not all projects have to be evaluated by SEIA, the newly passed regulation does not cover the consultation of projects that are not submitted to the aforementioned system. In terms of this ruling, the INDH has called for an increased legal regulation of indigenous consultation, on the basis that environmental legislation dedicates only one article to such an important issue¹⁰³. On the other hand, the INDH has valued the efforts of the Environmental Assessment Service (SEA) for carrying out a process of dialogue, and which recalls that, regardless of the scale of the investment project on indigenous lands and territory, any measures likely to directly affect indigenous communities must be subject to consultation¹⁰⁴. Likewise, the INDH has highlighted that in order to ensure compliance with Convention 169, consultation must be guaranteed for all projects likely to directly affect indigenous communities. In addition, this includes their subjection to an effective SEIA and Environmental Impact Report, as well as all consultation complying with relevant international standards.

Response to Paragraph No. 19 of the Concluding Observations:

87. The Chilean State has achieved important progress in terms of the rights on indigenous communities' land, particularly with the Indigenous Lands Fund from the National Indigenous Development Corporation (CONADI), which has purchased and handed over a large quantity of land to indigenous peoples. However, despite this progress¹⁰⁵ and in accordance with that noted by the UN Rapporteur on the Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples (2009), and the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations of the ILO (2012), the INDH has recommended the State's use of the legislation's existing mechanisms to return lands, or to adjust them when necessary, as a means of guaranteeing a prompt and effective restitution of traditional indigenous lands, as understood by international human rights law. Indigenous peoples should have the opportunity to participate and be consulted on the administrative and legislative measures adopted by the State relating to this issue¹⁰⁶.

88. On the other hand, given that the issue of land restitution is one of the principle sources of dispute, the exclusive use of criminal procedures in seeking to resolve the problem must be avoided. Similarly, the INDH has received complaints of police violence towards indigenous

¹⁰² Published in the Official Gazette, 13 August 2013, after the Comptroller General had made it public. The instrument will enter into force on 24 December 2013.

¹⁰³ "The Duty to Conduct Prior Consultation in the Proposal on the Environmental Assessment System Regulation", Resolution passed by the Council of the National Institute of Human Rights, 13 May 2013, Special Meeting 152, pp. 19-21.

¹⁰⁴ "The Duty to Conduct Prior Consultation in the Proposal on the Environmental Assessment System Regulation", Resolution passed by the Council of the National Institute of Human Rights, 13 May 2013, Special Meeting 152, pp. 24 et seq.

¹⁰⁵ The relevance of a policy concerning indigenous lands in accordance with international human rights directives has recently been confirmed by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations of the ILO, which, in its remarks to Chile in 2013, expressed its concern on the matter, noting: "In view of the persistence of a situation that is not in compliance with the Convention, the Committee reiterates its request to the Government to report in detail on the compliance with the Convention of the procedures for the regularization of land title and the settlement of disputes". International Labour Conference. Application of international labour standards, 2013 (1). Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. Report III (Parte 1A), General Report and remarks concerning particular countries. International Labour Office, Geneva, 2013.

¹⁰⁶ Recommendation of the INDH Commission on Rights of Indigenous Peoples. 2012.

peoples during the occupation of lands claimed under ancestral rights. In some cases violence against indigenous children has also been used, resulting in criminal trials¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Temuco Court of Appeal. Roll 1136-2011. Judgement of 21 December 2011. Hearing 5. The Judgement was later upheld by the Supreme Court, Roll 35-12, 5 January 2012.